

Septiembre 17 de 1947

43ª REUNION — 38ª SESION ORDINARIA

Presidencia del doctor ERNESTO F. BAVIO,
vicepresidente del Honorable Senado

Secretarios: señores ALBERTO H. REALES y SANTIAGO A. JOB

Prosecretario: señor ALBERTO A. GRAZIANO

SENADORES PRESENTES:

AMELOTTI, Osvaldo
 ANTILLE, Armando G.
 AVENDAÑO, Arcadio B.
 BASALDÚA, Juan Carlos
 BAVIO, Ernesto F.
 BUSQUET, Alfredo
 CRUZ, Luis
 DURAND, Alberto
 GÓMEZ DEL JUNCO, Felipe
 GÓMEZ HENRÍQUEZ, Samuel
 HERRERA, Julio
 LÁZARO, Juan Fernando de
 LORENZÓN, Ricardo Octavio
 MARTÍNEZ, Ramón Linidor
 RAMELLA, Pablo A.
 SAADI, Vicente Leonides
 SOLER, Lorenzo (h.)
 TANGO, Miguel A.
 TASCHERET, Oscar
 TEISAIRE, Alberto
 VALLEJO, César

AUSENTES, EN MISIÓN ESPECIAL:

LUCO, Francisco R.
 MOLINARI, Diego Luis

AUSENTE, CON LICENCIA:

MATHUS HOYOS, Alejandro
 ZERDA, Justiniano de la

AUSENTES, CON AVISO:

ARRIETA, Alfredo J. L.
 FIGUEIRAS, Demetrio
 SOSA LOYOLA, Gilberto

SUMARIO

1.—Asunto entrado:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdos.

2.—A moción del senador Gómez del Junco se resuelve prestar acuerdos en la sesión del próximo miércoles.

3.—Asuntos entrados:

II.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se autoriza la inscripción de inmuebles con el carácter de bienes de familia.

III.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre nombre de las personas físicas.

IV.—Mensajes del Poder Ejecutivo comunicando la promulgación de las leyes 13.008, 13.009 y 13.011.

V.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados.

VI.—Comunicación oficial.

VII.—Comunicaciones particulares.

VIII.—Despachos de comisiones.

IX.—Comunicaciones de la Presidencia del Honorable Senado.

4.—Proyecto de ley del senador Cruz sobre pensión a la señora María Dominga Echegoyen de Maidana.

5.—Proyecto de ley de los senadores de Lázaro y Basaldúa por el que se acuerdan \$ 2.000.000 m/n. a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, con destino a la Secretaría de Cultura y Policía Municipal.

6.—Proyecto de ley del senador Gómez del Junco sobre aclaración de la ley 12.832.

7.—Proyecto de ley del senador Gómez del Junco, sobre subsidio a las provincias y municipalidades que lo soliciten, a fin de que puedan abonar a los profesores y maestros remuneraciones iguales a las que paga la Nación.

8.—Licencia.

9.—A moción del senador Vallejo se resuelve tratar —con preferencia— en la sesión del próximo miércoles el proyecto de ley sobre representación parlamentaria de los territorios nacionales.

- 10.—Consideración del despacho de las comisiones de Agricultura y Especial Encargada de Estudiar el Plan de Realizaciones e Inversiones, en los proyectos de ley sobre creación de un Consejo Planificador de Población y Colonización. Se aprueba, modificado.
- 11.—Postergación.
- 12.—Consideración del despacho de las comisiones de Instrucción Pública y Presupuesto, Hacienda y Finanzas, en el proyecto de ley por el que se establece el sueldo mínimo a los profesores de enseñanza secundaria, normal y especial. Se aprueba.
- 13.—Consideración del despacho de la Comisión de Obras Públicas, en el proyecto de ley que modifica el artículo 29 de la ley 12.625 (artículo 26 de la 11.658, de Vialidad Nacional). Se aprueba.
- 14.—Consideración del despacho de las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto, Hacienda y Finanzas en el proyecto de ley sobre construcción de viviendas económicas para obreros en Villa San Martín, provincia de Santiago del Estero. Se aprueba.
- 15.—Consideración del despacho de las comisiones de Presupuesto, Hacienda y Finanzas y de Obras Públicas, en el proyecto de ley sobre construcción y habilitación de tres escuelas de artes y oficios en Ojo de Agua, Tintina y Loreto (Santiago del Estero). Se aprueba.
- 16.—Consideración del despacho de las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto, Hacienda y Finanzas, en el proyecto de ley sobre realización de estudios y construcción del camino de Patquia a Villa Unión, en la provincia de La Rioja. Se aprueba.
- 17.—Despacho de la Comisión Especial para Estudiar el Plan de Realizaciones e Inversiones del Poder Ejecutivo, en el proyecto de ley, en revisión, sobre régimen universitario.
- 18.—Preferencia.
- 19.—Consideración del despacho a que se refiere el número 17 del sumario.
- 20.—A moción del senador Saadi, se resuelve pasar a cuarto intermedio.
- 21.—Apéndice:

I.—Sanciones del Honorable Senado.

II.—Comunicaciones al Poder Ejecutivo.

—En Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de septiembre de 1947, siendo las 16 y 25, dice el

Sr. Presidente (Bavio). — Queda abierta la sesión, con la presencia de 17 señores senadores.

1

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Bavio). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

Mensaje del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdos. (*A la Comisión de Acuerdos*).

2

MOCION

Sr. Gómez del Junco. — Pido la palabra.

Habiendo despacho de la Comisión de Acuerdos, haría indicación de que se fije la sesión del miércoles próximo para su consideración.

—Apoyado.

Sr. Presidente (Bavio). — En consideración la moción formulada por el señor senador por Córdoba.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

3

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Bavio). — Continúa la lectura de los asuntos entrados.

II

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1947.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de elevar a vuestra honorabilidad para su aprobación legislativa el adjunto proyecto, autorizando la inscripción de bienes inmuebles con el carácter de bienes de familia.

Se trata de una institución no totalmente ajena a nuestro medio jurídico social, dado que la ley 10.284 consagra algunos principios semejantes, pero por distintos motivos no ha prestado los beneficios sociales que es necesario hacer llegar a la familia argentina.

El objeto que persigue el proyecto de ley que se acompaña es dar las mayores garantías posibles de estabilidad y tranquilidad a la familia que ha logrado adquirir un bien inmueble y que debe quedar ajeno a la acción de los acreedores por créditos de fecha ulterior a la inscripción del bien de familia.

Se pretende lograr para los cónyuges supervivientes la seguridad de que no podrán ser obligados a vender ese inmueble, sin su consentimiento, evitando así situaciones dolorosas provocadas a veces por los principios legales vigentes sobre partición y venta obligatoria de los bienes que se poseen en condominio o comunidad hereditaria.

Es tan justa la aspiración que este proyecto contiene que no duda el Poder Ejecutivo que vuestra honorabilidad le prestará preferente atención, en el convencimiento de que llegará por su sanción a darle una merecida tranquilidad a innumerables pequeños pro-

gasta con la 60, la 62 y también la 40, corriendo aquélla y ésta paralelamente, separadas por el Famatina.

Para dotar a las poblaciones del valle del Bermejo de un camino de llanura que permita el tránsito fácil y económico al transporte, el señor senador Martínez, conecedor al detalle de la región, presentó un proyecto de construcción de un camino que partiendo de Patquia sobre la ruta 38, es decir, del camino de Córdoba a La Rioja, y punto de arranque de la ruta 74, pase por Paganzo, Amango, Pagancillo y llegue a Villa Unión, sorteando por el Sur al Famatina.

Este camino, que será de una longitud aproximada de unos 200 kilómetros, tendrá un recorrido totalmente por llanura.

La zona que recorrerá es ya bien conocida. Fué estudiada por ingenieros cuando hace años proyectaban una línea férrea y fué también estudiada por geólogos de la talla de Bodenbender, Ramus y Hausen. Las areniscas cuarcíticas de color rojo oscuro con algunas incrustaciones de yeso, que afloran en las inmediaciones de las sierras de Paganzo, pero que con posterioridad fueron ubicadas en otras zonas del país, fueron estudiadas por estos geólogos, quienes al identificarlas como estructuras del Rético, es decir, del Gondwana superior, las denominaron «estratos de Paganzo». Estos estratos del triásico, es decir, de la era mesozoica, posteriores al de los del devónico, que constituyen la roca madre de los yacimientos petrolíferos de Salta y Bolivia, si bien demuestran que en aquel entonces eran zonas semidesérticas, quizás con el tiempo interesen a la industria petrolera. Su estudio indujo a Hausen a manifestar que los movimientos interpérmicos, tan importantes en la precordillera, originando montañas, sólo han tenido una repercusión muy suave en la zona oriental del Famatina y su prolongación al Sur.

La construcción de este camino, señor presidente, no resultará costosa, por ser todo su trazado en llanura, como se dijo, y disponerse de todos los materiales en el lugar; y la utilidad que prestará a las poblaciones del valle del Bermejo será enorme, porque las pondrá en contacto directo con la ciudad de La Rioja y también con la de Córdoba.

Otro factor que debe tenerse presente es que, al construirse el camino internacional de Vinchina a Chile por Peñas Negras, sancionado ya por el Honorable Senado, este camino que está en consideración lo acortará y facilitará las comunicaciones en forma tal, que podemos decir será su complemento.

Por estas razones, señor presidente, las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto, Hacienda y Finanzas aconsejan la sanción de su despacho, por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a invertir hasta la cantidad de

1.500.000 pesos en la construcción del camino Patquia - Villa Unión.

Sr. Presidente (Bavio). — Se va a votar en general el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular, es igualmente aprobado.

Sr. Presidente (Bavio). — Queda aprobado el despacho.

17

REGIMEN UNIVERSITARIO

—Se lee:

Despacho de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión Especial para Estudiar el Plan de Realizaciones e Inversiones del Poder Ejecutivo ha considerado el proyecto de ley, venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, sobre Régimen Universitario y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja le prestéis aprobación, con las modificaciones siguientes:

Artículo 2º (inciso 9º). — En la siguiente forma: «Propiciar y establecer la enseñanza y la docencia libre, paralela a los cursos regulares, la que podrá extenderse a disciplinas no previstas en los planes de estudio. Estos cursos comprenderán además de las asignaturas obligatorias, otras optativas o libres.»

Inciso 10. — En la siguiente forma: «Establecer una permanente vinculación entre ellas y con otras instituciones culturales argentinas y extranjeras.»

Inciso 14. — En la siguiente forma: «Divulgar las investigaciones científicas, fueren o no sus autores profesores universitarios y aunque no hubieran sido realizadas en instituciones oficiales.»

Artículo 6º — En la siguiente forma: «(Cátedras). La cátedra es la unidad docente básica de la universidad. Estará bajo la dirección del catedrático de quien dependerá el personal auxiliar encargado de transmitir los conocimientos para la formación de técnicos y profesionales de las carreras universitarias.»

«Las cátedras que alcancen un alto grado de evolución y perfeccionamiento en la técnica de la investigación científica, que cuenten con materiales y personal idóneo para esas tareas y que produzcan trabajos originales o trascendentales, podrán ser transformadas en institutos.»

Artículo 10 (inciso 10). — En la siguiente forma: «Nombrar y remover el personal de la

universidad, cuya designación y remoción no corresponda al consejo universitario o a las facultades, de acuerdo con el artículo 123 de la ley 12.961 y su reglamentación.»

Artículo 14. — En la siguiente forma: «(Incompatibilidad). El cargo de rector es incompatible con cualquier otra actividad pública, excepto la docencia en la misma universidad, o la de conferenciante, investigador, autor o miembro de academia, institución, sociedad o comisión científica, jurídica, social, literaria o cultural.»

Artículo 18 (inciso 14). — Suprimir las siguientes palabras: «(Ver artículo 105).»

Artículo 22. — En la siguiente forma: «(Gobierno). El gobierno de la facultad estará a cargo del decano y un consejo directivo, constituido por el decano y diez consejeros, que se designarán de entre los profesores de la respectiva facultad.»

Artículo 25. — En la siguiente forma: «(Voto secreto). La elección de los consejeros se efectuará en comicios de profesores, quienes votarán personalmente, en forma secreta, las listas de candidatos que los electores depositarán en dos urnas distintas: una reservada a los profesores titulares, que votarán, de entre ellos, por siete candidatos a consejeros titulares e igual número de substitutes; y otra, para los profesores adjuntos, que votarán en la misma forma que los titulares, pero solamente por cuatro candidatos a consejeros y otro número igual de substitutes». (El resto del artículo igual.)

Artículo 32. — Suprimir los incisos 12 y 13.

Artículo 39. — En la siguiente forma: «(Incompatibilidades). El decano tendrá las mismas incompatibilidades que el rector.»

Artículo 49. — En la siguiente forma: «(Elección de la terna). La comisión asesora elevará al consejo directivo de la facultad una terna por orden de méritos y títulos, antecedentes y trabajos, la que quedará sujeta a las siguientes condiciones.» (El resto del artículo igual.)

Artículo 79. — En la siguiente forma: «(Estudiantes regulares). Los estudiantes serán regulares y libres. Los primeros deberán asistir obligatoriamente, para mantener su situación de tales, a las clases prácticas y trabajos universitarios en la proporción que fije cada facultad. Son los únicos que pueden obtener becas.»

Artículo 86. — En la siguiente forma: «Entre los diez alumnos que hubieran obtenido las más altas calificaciones en el transcurso de su carrera y se encuentren cursando el último año, se sorteará el que ha de tener la representación estudiantil. Este cargo es irrenunciable, salvo causa justificada a juicio del consejo.»

Artículo 87. — Suprimido.

Artículo 88. — En la siguiente forma: «El delegado será convocado a las sesiones que celebre el consejo directivo. En dichas sesiones

el delegado podrá expresar libremente el anhelo de sus representados, no teniendo voto en las decisiones que adopte el consejo.»

Artículo 89. — En la siguiente forma: «El Estado creará becas para la enseñanza gratuita, cuya distribución entre las diversas universidades de la Nación se hará por el Poder Ejecutivo. Para proceder a dicha distribución, se tendrán en cuenta las características y necesidades regionales, sociales, económicas y culturales, referidas a cada universidad, procurando que con la concesión de becas se cumplan, de la manera más acabada posible y con un sentido social, los fines asignados a la universidad.»

«Habrá dos clases de becas: las de estudio y las de estímulo. A la primera tendrán derecho y será otorgada a los estudiantes que poseyendo aptitud universitaria sean hijos de familias de obreros, artesanos o empleados cuyos ingresos, atendidas las circunstancias de cada caso, no permitan costear los estudios universitarios ni prescindir en todo o en parte de la ayuda económica que aporte o pudiera aportar el becado. Dicha beca consistirá en obtener gratuitamente la enseñanza universitaria en todos sus aspectos y grados, el suministro de libros y útiles, y en otorgamiento del diploma o título que se obtuviere, y en conceder una compensación económica familiar que equivalga lo más aproximadamente posible a la aportación del alumno.»

«Lo anterior es aplicable a los casos en que la familia obrera, artesana o empleada, careciere de cabeza de la misma y se hallare en análogas condiciones económicas a las señaladas en el párrafo anterior y al muchacho o a la muchacha que sin familia y poseyendo la aptitud universitaria adecuada careciere de los recursos necesarios para ingresar y estudiar en la universidad.»

«A la segunda tendrán derecho y será otorgada a estudiantes destacados, de familia obrera o de empleado, para compensar la privación total o parcial de aporte económico al hogar que les imponga el estudio.»

Artículo 91. — Último párrafo en la siguiente forma: «La cancelación se hará por el rector con aprobación del consejo universitario. Al alumno a quien le fuere cancelada la beca no se le otorgará otra en ninguna de las universidades de la Nación, salvo el caso del inciso 6º del artículo presente.»

Artículo 94. — «(Admisión de alumnos). Las condiciones de admisibilidad para los estudiantes a las universidades serán uniformes para todo el país y se fijarán por el Consejo Nacional Universitario.»

Artículo 95. — En la siguiente forma: «(Condiciones). Todo el que solicite ingresar a los cursos o rendir examen en las facultades deberá acreditar tener aprobados los estudios que correspondan a la enseñanza media, normal o

especial, de acuerdo con la reglamentación que se establezca.»

Artículo 97. — En la siguiente forma: «(Pruebas de competencia previas). Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, se podrán exigir estudios complementarios o pruebas de competencia, antes de aceptar la incorporación de alumnos a las facultades.»

Artículo 101. — Agrega* como último apartado: «Las facultades organizarán cursos populares de extensión universitaria a cargo de profesores y alumnos.»

Artículo 109. — (inciso 2º). En lugar de $\frac{1}{5}$ %, 2 %.

Artículo 114. — (inciso 3º). En la siguiente forma: «Armonizar y uniformar los planes de estudio, condiciones de ingreso, sistema de promoción, número de cursos y títulos a otorgar para las mismas carreras.»

Artículos 115 y 116. — Suprimidos.

Pablo A. Ramella. — Alberto Durand. — Lorenzo Soler (h.). — Julio Herrera. — César Vallejo. — Arcadio Avendaño. — Vicente Leonides Saadi. — Oscar Tascheret. — Alberto Teisaire. — Ernesto F. Bavio. — Felipe Gómez del Junco.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
(24 de julio de 1947)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TITULO I

De las universidades

CAPÍTULO I

De las funciones, tareas, organización en general y capacidad jurídica de las universidades

Artículo 1º — (Objetivos.) Las universidades tienen a su cargo la enseñanza en el grado superior, la formación de la juventud para la vida, el cultivo de las ciencias y para el ejercicio de las profesiones liberales, debiendo actuar con sentido social en la difusión de la cultura para el prestigio y engrandecimiento de la Nación. Cuentan para ello, con la autonomía técnica, docente y científica que se les confiere por la presente ley y con el pleno ejercicio de su personalidad jurídica.

Art. 2º — (Funciones.) Son funciones de las universidades, de las cuales no podrán apartarse:

- 1ª Afirmar y desarrollar una conciencia nacional histórica, orientando hacia esa finalidad la tarea de profesores y alumnos;
- 2ª Organizar la investigación científica y preparar, para la ulterior dedicación a ella, a los que tengan vocación de investigaciones, capaces por su aplicación, inventiva, saga-

cidad y penetración, de hacer progresar las ciencias, las letras y las artes;

- 3ª Acumular, elaborar y difundir el saber y toda forma de cultura, en especial la de carácter autóctono para la conformación espiritual del pueblo;
- 4ª Estimular el estudio y desarrollo de la ciencia aplicada y las creaciones técnicas, adaptándolas a las necesidades regionales;
- 5ª Preparar para el ejercicio de las profesiones liberales de acuerdo con las necesidades de la Nación, los adelantos técnicos mundiales y las transformaciones sociales otorgando los títulos habilitantes con carácter exclusivo;
- 6ª Crear un cuerpo docente dedicando exclusivamente a la vida científica y a la enseñanza universitaria, de suerte que cada escuela y cada facultad tenga la obligación de formar sus propios profesores e investigadores especializados;
- 7ª Ofrecer una educación informativa y formativa, disciplinando el esfuerzo autodidáctico, el espíritu indagativo y las cualidades que habilitan para actuar con idoneidad, patriotismo y dignidad moral, en la profesión y en la vida pública y privada;
- 8ª Correlacionar las formas del saber propendiendo a la cultura general de la juventud como base o complemento de la especial o técnica;
- 9ª Propiciar y ampliar la enseñanza práctica e incorporar la docencia libre, paralela a los cursos regulares, que podrá extenderse a disciplinas no previstas en los planes de estudios. Estos comprenderán, además de las asignaturas obligatorias, otras optativas o libres;
10. Establecer una permanente vinculación entre ellas y con otras instituciones culturales extranjeras;
11. Elaborar, conforme con las exigencias científicas y sociales, los planes de estudio de las respectivas facultades, escuelas y cursos especiales, en lo universitario y en los de especialización, procurando que exista la mayor unidad y coordinación entre los planes de estudios similares, sin perjuicio de la diversificación impuesta por las características regionales;
12. Crear y sostener institutos de investigación, cursos de perfeccionamiento o de especialización, para profundizar el estudio o aprovechamiento de las riquezas naturales de la zona del país y en especial de la zona donde tuviera su centro de acción cada universidad;
13. Reunir antecedentes y proponer soluciones para los diversos problemas económicos sociales de la Nación;
14. Divulgar las investigaciones científicas realizadas en el país, fueren o no sus autores profesores universitarios y aunque no hubieran sido realizadas en instituciones oficiales;
15. Fomentar el desarrollo de publicaciones y actividades dedicadas al examen de cuestiones científicas, sociales, jurídicas, económicas, literarias y artísticas en general.

Art. 3º — (Personalidad jurídica.) Las universidades poseen plena capacidad jurídica para adquirir,

vender y administrar toda clase de bienes, así como para demandar y comparecer en juicio. Su representación compete al rector, quien podrá delegarla y otorgar, en su caso, los poderes necesarios.

Art. 4º — (Funciones específicas.) Las universidades no deberán desvirtuar en ningún caso y por ningún motivo sus funciones específicas. Los profesores y alumnos no deben actuar directa ni indirectamente en política, invocando su carácter de miembros de la corporación universitaria, ni formular declaraciones conjuntas que supongan militancia política o intervención en cuestiones ajenas a su función específica, siendo pasible quien incurra en transgresión de ello, de exoneración, expulsión, cesantía o suspensión, según el caso. Esto no impide la actuación individual por la vía legítima de los partidos políticos, pero, en ese caso, actuarán como simples ciudadanos y no en función universitaria.

Art. 5º — (Integración.) Integran las universidades:

- a) Las facultades, sus escuelas y respectivas cátedras, departamentos, seminarios, institutos y secciones destinadas a la enseñanza teórico-práctica;
- b) Los establecimientos que funcionan actualmente dentro de la jurisdicción universitaria y los que se incorporaren posteriormente bajo la misma dependencia;
- c) Los establecimientos privados, municipales provinciales o nacionales, que fueren transferidos a la jurisdicción universitaria por la autoridad respectiva.

Art. 6º — (Cátedras.) La cátedra es la unidad docente de la universidad. Estará bajo la dirección de un catedrático y del personal auxiliar, encargados de transmitir los conocimientos básicos y clásicos para la formación de técnicos y profesionales de las carreras universitarias.

Las cátedras que alcancen un alto grado de evolución y perfeccionamiento en la técnica de la investigación científica, que cuenten con materiales y personal idóneo para esas tareas y que produzcan trabajos originales o trascendentes, podrán ser transformados en institutos.

Art. 7º — (Institutos.) El instituto es la unidad universitaria para la investigación científica. El catedrático que se encuentre al frente del instituto ascenderá a la categoría de director del mismo. La universidad propenderá a que sus institutos correlacionen la enseñanza y la investigación científica de modo tal que la docencia universitaria tenga su fuente natural en la investigación directa y profunda de la realidad.

Art. 8º — (Departamento.) El departamento es la unidad de coordinación de las investigaciones científicas sobre una misma materia. La agrupación funcional de institutos, cátedras y centros de investigación afines, al margen de las respectivas actividades docentes, constituye un departamento. Será dirigido por un jefe designado por rotación periódica entre los directores de institutos o catedráticos integrantes del departamento. Los institutos, cátedras o centros de investigación, que reunidos formen un departamento, pueden pertenecer a la misma o a distintas facultades e inclusive tener su sede en

otras universidades. La organización departamental es optativa de cada universidad o facultad.

CAPÍTULO II

Del gobierno de la universidad

Art. 9º — El gobierno de la universidad estará a cargo del rector y del consejo universitario.

A) Del rector

Art. 10. — (Designación.) El rector será designado por el Poder Ejecutivo y durará tres años en funciones.

Art. 11. — (Requisitos.) Para ser rector se requiere: ser ciudadano argentino, haber cumplido 30 años de edad y 10 años de diplomado; poseer el título máximo de la facultad nacional correspondiente o ser profesor titular o adjunto confirmado.

Art. 12. — (Deberes y atribuciones.) Sin perjuicio de las demás funciones que le impone y otorga la presente ley y las que le asignen otras disposiciones legales, el rector tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

- 1º Representar legalmente a la universidad;
- 2º Designar las personas que llevarán la representación oficial de la universidad;
- 3º Convocar al consejo universitario a reuniones ordinarias y extraordinarias, expresando en la convocatoria los asuntos a tratarse;
- 4º Firmar los títulos, diplomas, distinciones y honores universitarios;
- 5º Proponer a los consejos directivos de las facultades las ternas para la designación de decano de las mismas;
- 6º Resolver las cuestiones que no se hallen expresamente reservadas al consejo universitario o a las autoridades de las facultades;
- 7º Dirigir la administración de la universidad, pudiendo recabar de las facultades y demás institutos de la universidad los informes que estime conveniente;
- 8º Vigilar la contabilidad de la universidad y tener depositados a su orden los fondos universitarios;
- 9º Decretar por sí solo los pagos previstos en el presupuesto de la universidad y autorizar los demás que el consejo ordene;
10. Nombrar y remover el personal de la universidad, cuya designación y remoción no corresponda al consejo universitario o a las facultades;
11. Adoptar las medidas necesarias y urgentes para el buen gobierno de la universidad, dando cuenta de ello al consejo universitario;
12. Ejercer la jurisdicción policial y la disciplina en primera instancia, en el asiento del rectorado y del consejo;
13. Conceder las licencias o permisos en los casos señalados por las reglamentaciones pertinentes;
14. Publicar durante el primer trimestre de cada año, una memoria que consigne la tarea docente y la gestión administrativa realizada en el período anterior.

Art. 13. — (Voto del rector.) El rector tendrá voz y voto en las decisiones del consejo, prevaleciendo el suyo en caso de empate.

Art. 14. — (Incompatibilidad.) El cargo de rector es incompatible con cualquiera otra actividad pública, excepto la docencia en la misma universidad, el ejercicio de un mandato popular de la Constitución o la de conferenciante, investigador, autor o miembro de academia, institución, sociedad o comisión científica, jurídica, social, literaria o cultural.

Art. 15. — (Retribución.) — El rector recibirá como única retribución, la cantidad de cuatro mil pesos mensuales. En el caso de ser profesor, percibirá únicamente el sueldo de rector.

B) Del vicerrector

Art. 16. — (Funciones, requisitos y retribución.) El vicerrector ejercerá las funciones del rector en ausencia, renuncia o impedimento de éste, o las que el mismo, expresamente y mediante la oportuna comunicación, le delegare. Para ser elegido vicerrector se requerirán las mismas condiciones que para ser rector. Percibirá para gastos de representación, la suma de quinientos pesos mensuales.

C) Del consejo universitario

Art. 17. — (Constitución.) El consejo universitario estará constituido por el rector, que lo presidirá, y por los decanos y vicedecanos de cada facultad.

Art. 18. — (Atribuciones.) El consejo universitario tendrá las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las demás que se le acuerdan en esta ley:

- 1ª Ejercer la jurisdicción superior universitaria y resolver a última instancia las cuestiones contenciosas que hayan fallado el rector o las facultades, con excepción de aquellas atribuidas expresamente por esta ley a las facultades;
- 2ª Proponer al Poder Ejecutivo la creación de nuevas facultades;
- 3ª Dictar los reglamentos convenientes para el régimen común de los estudios y disciplina general de los establecimientos universitarios;
- 4ª Aprobar los planes de estudio a propuesta de las respectivas facultades;
- 5ª Acordar por iniciativa propia o a propuesta de las facultades el título de doctor honoris causa, o de miembro honorario de la universidad, o las personas que sobresalieren por sus obras, estudios o trabajos de investigación;
- 6ª Decidir en última instancia las cuestiones sobre validez o equivalencia de títulos, diplomas, estudios, asignaturas, honores y distinciones universitarias que hubieran sido resueltas por los consejos de las facultades;
- 7ª Acordar por iniciativa propia o a propuesta de las facultades la creación de nuevas escuelas e institutos;
- 8ª Proyectar el presupuesto anual y aprobar las cuentas presentadas por el rector, y la inversión de los fondos asignados a la universidad, las facultades y demás establecimientos universitarios;
- 9ª Resolver lo conducente al ejercicio de la personería jurídica de la universidad;

10. Dictar su reglamento interno y las ordenanzas necesarias para la buena marcha de la institución;
11. Aprobar o devolver observadas a las facultades las ternas formuladas por éstas para la provisión de cátedras titulares, así como las reglamentaciones que dicten aquéllas para la designación de profesores adjuntos extraordinarios y honorarios. El consejo universitario sólo tiene facultad para considerar el aspecto formal de las ternas y las objeciones morales a los candidatos, nunca el orden de los nombres ni la competencia científica y didáctica que son privativos de cada facultad;
12. Elegir un vicerrector entre sus miembros, que durará tres años en funciones;
13. Fijar las épocas de inscripción y los aranceles universitarios, estos últimos ad referendum del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública;
14. Aceptar las herencias con beneficio de inventario, y los legados o donaciones que se dejen o hagan a las universidades o a las facultades o establecimientos que las integren (ver artículo 105);
15. Vender, con autorización del Poder Ejecutivo, los bienes inmuebles, títulos y valores pertenecientes a la universidad;
16. Modificar a propuesta de las facultades, las escuelas que las integren y sus títulos universitarios, como asimismo fijar por su sola decisión las proporciones en que éstas estarán representadas en los consejos directivos;
17. Revalidar los diplomas expedidos por universidades extranjeras, de acuerdo con las leyes y con los tratados internacionales previo estudio, en cada caso, del valor científico y jerarquía de la enseñanza impartida por las mismas y consideración que merecen sus títulos;
18. Ejercer las facultades disciplinarias que determina esta ley y los reglamentos que se dictaren;
19. Reglamentar, a propuesta de las facultades, las incompatibilidades para el ejercicio del cargo de profesor, según se exija o no dedicación exclusiva;
20. Aprobar las reglamentaciones que dicte cada facultad sobre sus respectivas carreras docentes o científicas.

D) De la Secretaría General de la Universidad

Art. 19. — (Designaciones.) La Secretaría General de la Universidad estará a cargo de un secretario y un prosecretario designados por el rector, que deberán tener título universitario nacional. Las funciones permanentes del secretario y del prosecretario, además de las consignadas en esta ley, serán las que se establezcan en la reglamentación correspondiente.

Art. 20. — (Atribuciones.) El secretario general deberá actuar en las sesiones del consejo universitario y llevar un libro de actas de las mismas; refrendará, además, todas las resoluciones del consejo universitario y del rector.

Art. 21. — (Atribuciones.) El prosecretario general deberá actuar como secretario en las comisiones del consejo universitario; tendrá a su cargo el despacho de los institutos y establecimientos dependientes del consejo universitario y refrendará todas las resoluciones del rector, dictadas para esas dependencias.

TITULO II

De las facultades

Art. 22. — (Gobierno.) El gobierno de la facultad estará a cargo de un consejo directivo, constituido por un decano y diez consejeros, que se designará de entre los profesores de la respectiva facultad.

Art. 23. — (Duración.) El decano y los consejeros durarán tres años en sus funciones, no pudiendo estos últimos ser reelegidos en el mismo carácter, sino con intervalo de un período.

A) Del consejo directivo y de la elección de decano

Art. 24. — (Proporciones.) Cuando una facultad esté formada por más de una escuela, el consejo universitario fijará la proporción de consejeros con que cada una de ellas estará representada en el mismo.

Art. 25. — (Voto firmado.) La elección de consejeros se efectuará en comicios de profesores, quienes votarán personalmente, firmando las listas de candidatos, que los electores depositarán en dos urnas distintas: una reservada a los profesores titulares, que votarán, de entre ellos, por siete candidatos a consejeros titulares e igual número de substitutes; y otra, para los profesores adjuntos, que votarán en la misma forma que los titulares, pero solamente por cuatro candidatos a consejeros y otro número igual de substitutes.

Los consejeros que pierdan su condición de profesores, cesarán inmediatamente en el ejercicio de este cargo.

Art. 26. — (Escrutinio y proclamación.) El escrutinio y proclamación de los candidatos elegidos los harán el decano, el vicedecano y el consejero titular de más edad.

Art. 27. — (Elección de decano.) Los consejeros elegidos se reunirán bajo la presidencia del de mayor edad que sea profesor titular y elegirán, a su vez, por el voto de la mayoría, decano de la terna enviada por el rector de la universidad. Si la elección recayera en un profesor (titular o adjunto) que no formara parte del consejo, quedará eliminado de hecho el consejero (profesor titular o adjunto, según sea la categoría del electo) que al ser elegido obtuvo menor número de votos. Si dos o más se encontrasen en estas condiciones, la eliminación se hará por sorteo, manteniendo siempre la proporción señalada en el artículo 25.

Art. 28. — (Consejeros substitutes.) Las vacantes de consejeros titulares que se produzcan antes de la fecha de renovación, serán llenadas por sorteo que se realizará entre los consejeros substitutes de titulares o de adjuntos, según sea la vacante producida y manteniendo la representación de las escuelas.

Art. 29. — (Desintegración y acefalia.) Si por sucesivas vacantes o ausencias quedara agotado el número de consejeros substitutes, el consejo directivo —aun en minoría— designará de entre los profesores, según sea la vacante, el que deba llenarla para completar el período.

Art. 30. — (Quórum.) Las sesiones del consejo directivo se realizarán con el quórum de siete consejeros, y sólo podrán ser presenciadas por los profesores, por periodistas y por no más de quince estudiantes de la misma facultad, de acuerdo con la reglamentación que dicte oportunamente cada una de ellas. Las sesiones del consejo serán secretas, cuando

así lo resuelva el consejo o el decano, en casos de excepción.

Art. 31. — (Consejos departamentales.) En aquellas facultades constituidas por departamentos, el consejo estará integrado por un representante de cada uno de ellos, sin exceder el número indicado en el artículo 24 y manteniéndose la proporción de dos tercios de titulares y un tercio de adjuntos, en la misma forma que lo establece el artículo 25.

Art. 32. — (Atribuciones.) El consejo directivo tendrá las siguientes atribuciones:

- 1ª Designar decano de entre la terna presentada por el rector;
- 2ª Designar vicedecano de entre sus miembros;
- 3ª Confeccionar y modificar los planes de estudios de las carreras o cursos especiales aprobándolos en primera instancia y establecer, en cada caso con la aprobación del Consejo Universitario, cuáles deben ser las cátedras que exijan de los profesores titulares una consagración exclusiva;
- 4ª Proponer y aprobar la creación de institutos o cursos de investigación;
- 5ª Organizar las actividades que para el fomento de la cultura en general sean atinentes a cada facultad;
- 6ª Proponer al consejo universitario por resolución adoptada por dos tercios de votos la designación de profesor titular en cátedra vacante, al profesor titular de la misma materia o materia afín de otra universidad del país; como asimismo proponer a la universidad la designación de los profesores extraordinarios en la respectiva facultad;
- 7ª Dictar el reglamento de la facultad y las ordenanzas necesarias para la buena marcha de la enseñanza o de la investigación científica;
- 8ª Decidir en primera instancia las cuestiones contenciosas referentes al orden de los estudios, condiciones de ingreso, pruebas de promoción y cumplimiento de los deberes de los profesores, y en única instancia las cuestiones que se susciten en la aplicación de los incisos 10, 12 y 13 de este artículo;
- 9ª Elevar al gobierno de la universidad, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente ley, las ternas de los profesores titulares propuestos por las comisiones asesoras y designar los profesores de las demás categorías;
10. Apercibir y suspender a los profesores por faltas en el cumplimiento de sus deberes;
11. Pedir al Poder Ejecutivo, por intermedio del rector, la separación de los profesores titulares o elevar sus renunciaciones. Remover a los demás profesores y decidir sobre sus renunciaciones;
12. Determinar la forma de promoción de los alumnos;
13. Fijar las condiciones de admisibilidad en sus aulas;
14. Proyectar el presupuesto de la facultad.

Art. 33. — (Incompatibilidades.) Los miembros titulares del consejo directivo no podrán desempeñar empleos rentados dependientes de la universidad, con excepción de los cargos directivos y docentes. Tampoco podrán ser nombrados para cátedras, dirección, empleo o comisión rentada creados durante su mandato, hasta después de dos años de fenecido

éste. Los aspirantes a cátedras ya existentes podrán presentarse al concurso, previa renuncia como miembros del consejo directivo.

B) Del decano

Art. 34. — (Requisitos.) Para ser decano se requiere ser ciudadano argentino, haber cumplido treinta años de edad, y ser profesor titular, honorario, o adjunto confirmado de la respectiva facultad.

Art. 35. — (Duración.) El decano durará tres años en su cargo, y en caso de separación, renuncia o muerte, el nuevo decano será designado por el tiempo que faltare para completar el período.

Art. 36. — (Voto del decano.) El decano tendrá voz y voto en las decisiones del consejo, prevaleciendo el suyo en caso de empate.

Art. 37. — (Gastos de representación.) El decano percibirá, como gasto de representación, la suma de un mil pesos moneda nacional mensuales.

Art. 38. — (Facultades.) Son atribuciones y deberes del decano:

- 1º Convocar y presidir las sesiones del consejo directivo;
- 2º Representar a la facultad en sus relaciones con las demás autoridades universitarias y corporaciones científicas;
- 3º Firmar, juntamente con el rector, los diplomas universitarios y certificados de reválida;
- 4º Dar cuenta mensualmente al consejo directivo de la falta de asistencia de los profesores a las aulas, de las pruebas de promoción y elevar al rector una relación de las mismas;
- 5º Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de los consejos universitario y directivo;
- 6º Expedir concesiones de ingreso, permisos y certificados de promoción, con arreglo a las ordenanzas del consejo universitario y del consejo directivo;
- 7º Acordar a los profesores licencias que no excedan de 45 días y nombrar y separar por sí, a los empleados cuya designación no corresponda al consejo directivo;
- 8º Ejercer la vigilancia de la enseñanza y de la administración y la jurisdicción policial y disciplinaria dentro de la facultad, escuelas e institutos;
- 9º Designar el secretario de la facultad, el que tendrá que ser egresado de la misma;
10. Rendir cuenta de la inversión de fondos;
11. Fijar las épocas de examen, número de turnos y orden de los mismos;
12. Despachar definitivamente todos los asuntos de trámite, con el simple dictamen de la comisión respectiva del consejo directivo, salvo discrepancia, en cuyo caso el asunto será tratado por el propio consejo.

Art. 39. — (Incompatibilidades.) El decano tendrá las mismas incompatibilidades que el profesor titular.

C) Del vicedecano

Art. 40. — (Duración y funciones.) El vicedecano durará tres años en funciones. Ejercerá las del decano durante la ausencia o impedimento de éste, o las que el mismo expresamente y mediante la oportuna comunicación le delegare. En caso de vacancia del

vicedecanato, el consejero que lo substituya completará el período.

Art. 41. — En caso de ausencia, renuncia o fallecimiento del vicedecano en ejercicio del decanato, asumirá las funciones de vicedecano interino el consejero profesor titular de mayor antigüedad.

TITULO III

De los profesores

Art. 42. — (Categorías de profesores.) Las universidades tendrán cuatro categorías de profesores: titulares, adjuntos, extraordinarios y honorarios, no pudiendo crearse nuevas categorías.

Art. 43. — (Equivalencias.) Si por los estatutos de algunas universidades, reglamentarios de la ley 1.597, se hubiera adoptado otra nomenclatura y concepto respecto de las categorías de profesores, las facultades establecerán las adaptaciones y equivalencias correspondientes, de acuerdo con la presente ley.

A) Profesores titulares

Art. 44. — (Autonomía de la cátedra.) Los profesores titulares tienen a su cargo la dirección y ejercicio de la enseñanza teóricopráctica de su asignatura y el desempeño autonómico de la cátedra, bajo su exclusiva responsabilidad.

Art. 45. — (Requisitos.) Para ser designado profesor titular se requiere ser ciudadano argentino y poseer el título o diploma de la respectiva carrera, salvo la excepción del artículo 52.

Art. 46. — (Concurso.) Los profesores titulares serán designados por el Poder Ejecutivo de la Nación, de una terna de candidatos elevada por la universidad previo concurso de méritos, aptitudes técnicas, títulos, antecedentes y trabajos.

Art. 47. — (Dedicación.) El profesor titular está obligado a dedicar el máximo de su tiempo a las tareas de investigación y docencia. No podrá defender intereses que estén en pugna, competencia o colisión con los de la Nación, provincias o municipios, siendo pasibles si lo hicieren, de suspensión, cesantía o exoneración.

1) De la formación de las ternas

Art. 48. — (Comisión asesora.) El consejo directivo de cada facultad designará, en cada caso, una comisión asesora compuesta por tres miembros sorteados entre un mínimo de diez profesores titulares de la misma materia, si los hubiere, y de las materias afines a la cátedra, de la misma facultad o de otras universidades, si no alcanzare a integrarse con los de aquélla.

El orden de afinidad entre las materias se establecerá con carácter permanente por las facultades al aprobar los respectivos planes de estudio.

Art. 49. — (Elevación de la terna.) La comisión asesora elevará al consejo directivo de la facultad una terna por orden de méritos, títulos, antecedentes y trabajos:

- a) El consejo directivo de la facultad podrá observar el aspecto formal de las ternas, variar su orden o integrarlas en forma distinta a la propuesta por la comisión asesora, requiriéndose para esto último dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros;

- b) La terna será elevada a la universidad, que juzgará sobre los aspectos formales del concurso. En caso de que el consejo directivo hubiere modificado el dictamen de la comisión asesora, elevará un informe fundado al consejo universitario, exponiendo los motivos y antecedentes que determinaron la modificación de la terna;
- c) La universidad después de aprobar la terna la elevará al Poder Ejecutivo juntamente con los siguientes antecedentes:

- 1º El dictamen de la comisión asesora;
- 2º Títulos universitarios de los candidatos, indicándose los institutos que los hayan expedido y fecha de su otorgamiento;
- 3º Obras y publicaciones de aquéllos, consignándose, en primer término, las relativas a la materia del concurso;
- 4º Datos de la libreta de enrolamiento y del servicio militar;
- 5º Empleos y cargos que desempeñen o hayan desempeñado en la administración nacional, provincial o comunal, y, en su caso, las jubilaciones de que gocen;
- 6º Copia autorizada de las actas de las sesiones del consejo directivo y del consejo universitario, en que se hubiere tratado la terna.

Art. 50. — (Requisitos para figurar en terna.) Para figurar en terna se requieren antecedentes morales inobjectables, ser egresado con cinco años por lo menos de antelación, poseer diploma universitario nacional, salvo el caso del artículo 52, y haber acreditado aptitudes docentes y trabajos científicos en la correspondiente especialidad o en materia de íntima conexión con ella. El título de profesor adjunto se tendrá en cuenta en forma preferente al configurar la terna. La actividad científica y docente del candidato deberá ser continua y comprobada mediante publicaciones y cursos que se estimarán no sólo por el número, sino también y en primer término, por el mérito intrínseco. A los concursantes que no fueran profesores adjuntos, la respectiva facultad podrá exigirles una prueba complementaria.

Art. 51. — (Formación de la terna.) Las ternas para profesor titular deberán formarse previo dictamen escrito y fundado de la comisión asesora del consejo directivo.

Art. 52. — (Inscripción sin título universitario.) Cuando el aspirante no tenga título universitario, su inscripción en el concurso requerirá la unanimidad de votos de los miembros del consejo directivo.

Art. 53. — (Inscripción extraordinaria.) Hasta diez días después de cerrado el concurso, podrá proponerse al consejo directivo, por cuatro consejeros y con la conformidad del interesado, la inscripción en el mismo de toda persona de relevante y notorio prestigio científico, en cuyo caso, para ser considerado por la comisión asesora, necesitará contar con la aprobación del consejo directivo por las dos terceras partes de sus votos.

Art. 54. — (Opción de los titulares.) Los profesores titulares pueden presentarse a concurso para optar a otras cátedras afines, pero si obtuviesen la vacante están obligados a renunciar a la cátedra que hubieren estado dictando.

Art. 55. — (Plazo del llamado a concurso.) Producida una vacante de profesor titular, se llamará a concurso dentro de un plazo no mayor de tres meses poniéndose, interinamente, la cátedra a cargo de un profesor adjunto correspondiente a la misma materia y, a falta de éste, podrá designarse otro profesor de materias afines.

Art. 56. — (Prórroga del ejercicio de la cátedra.) El consejo directivo de cada facultad podrá, anualmente, autorizar por la mayoría de sus votos, a continuar en el ejercicio de la cátedra titular, a los profesores que estuvieren en condiciones de obtener su jubilación ordinaria.

Art. 57. — (Separación de profesores.) Podrán los consejos directivos promover la separación de los profesores, por las siguientes causas:

- 1ª Condena criminal;
- 2ª Abandono de las funciones del cargo;
- 3ª Violación de las disposiciones del artículo 47.

2) Atribuciones y deberes de los profesores titulares

Art. 58. — Son deberes y atribuciones de los profesores titulares:

- 1º Dictar el curso con arreglo a los programas y horarios oficiales;
- 2º Presentar anualmente su programa y proponer el plan de distribución de la enseñanza teóricopráctica con los profesores adjuntos, según la reglamentación de cada facultad;
- 3º Formar parte de las mesas examinadoras;
- 4º Desempeñar las comisiones relacionadas con la enseñanza;
- 5º Participar en las elecciones de autoridades universitarias;
- 6º Colaborar en las publicaciones de la universidad y en las investigaciones de los institutos científicos;
- 7º Informar anualmente a la biblioteca, en colaboración con los profesores adjuntos, sobre el movimiento bibliográfico fundamental de su materia;
- 8º Informar al consejo directivo sobre toda novedad científica o docente;
- 9º A más de su labor docente sobre la materia que enseñe, deberá realizar aquella otra que establezca, con sus alumnos y colegas, una relación de comprensión y convivencia que facilite, en todo momento, la creación y el sentimiento de una concepción social y humanista de las funciones universitarias;
10. Desempeñar las comisiones que la universidad o la facultad le encomienden.

Art. 59. — (Obligación de colaborar oficialmente.) El profesor que optare por dedicar todo su tiempo a la universidad, estará obligado a prestar su dirección y asesoramiento técnico cuando fuera requerido por el Poder Ejecutivo.

Art. 60. — (Dedicación a una sola cátedra.) En ningún caso se podrá desempeñar, por un mismo profesor titular, más de una cátedra.

B) Profesores adjuntos

Art. 61. — (Funciones y designación.) Los profesores adjuntos deben colaborar en la enseñanza oficial, de acuerdo con la reglamentación de cada facultad.

Los profesores adjuntos serán nombrados por concurso por el consejo directivo, con aprobación del consejo universitario. Podrá admitirse a los concursos para profesores adjuntos, aun cuando no hayan seguido la carrera docente, a aquellos candidatos de reconocida personalidad científica probada con trabajos o actuación docente. En tal caso se requerirá ser propuesto por cuatro consejeros de la facultad.

Art. 62. — (Designación extraordinaria.) Podrá prescindirse del concurso, cuando el candidato goce de reconocida personalidad científica, probada con trabajos o actuación docente. En tal caso, se requerirá ser propuesto por cuatro consejeros de la facultad y aprobado por dos tercios de votos del consejo directivo.

Art. 63. — (Régimen de adjuntos.) Cada facultad determinará, con aprobación del consejo universitario, el número de profesores adjuntos que corresponda a cada cátedra. Todas las ordenanzas relativas al régimen de concursos para la designación de profesores adjuntos requerirán aprobación del consejo universitario.

Art. 64. — (Confirmación.) Cumplidos cuatro años de su designación el profesor adjunto, para seguir siéndolo, deberá ser confirmado por el consejo universitario, el que tendrá para ello en cuenta lo siguiente: su comportamiento ético y moral; haber dictado por lo menos dos cursos complementarios, según la reglamentación de cada facultad, y haber presentado un trabajo sobre la materia, juzgado por una comisión nombrada por el consejo directivo, que se llamará tesis de profesorado.

Los profesores adjuntos que no hayan sido confirmados, quedarán de hecho cesantes.

Art. 65. — (Deberes y atribuciones.) Son deberes y atribuciones del profesor adjunto:

- 1º Reemplazar a los titulares en el desempeño de sus cátedras y demás funciones;
- 2º Dictar cursos complementarios o de otro orden, de acuerdo con la reglamentación de la respectiva facultad;
- 3º Formar parte de los tribunales de promoción y de los jurados y desempeñar las comisiones que las facultades creyeran necesario encomendarle;
- 4º Participar en las elecciones establecidas en esta ley.

Art. 66. — (Asistentes.) Se designarán, cada año, hasta dos profesores adjuntos para actuar como asistentes del profesor titular. El profesor titular tratará de turnar entre los profesores adjuntos la designación de los asistentes. Serán nombrados por el decano a propuesta del profesor titular y tendrán, además de las obligaciones inherentes a su carácter de adjuntos, las que reglamente cada facultad para su condición de docentes auxiliares de la cátedra titular.

C) Profesores extraordinarios

Art. 67. — (Designación.) El consejo universitario, a propuesta del consejo de la facultad, podrá designar profesores extraordinarios, con carácter de con-

tratados, a personas de nacionalidad argentina o extranjera, de reconocida reputación en la materia de que se trate. El límite de duración, la remuneración y las funciones de los profesores extraordinarios serán determinados en cada caso por la facultad respectiva al formular la propuesta.

Al profesor extraordinario no le son aplicables las incompatibilidades y demás disposiciones análogas establecidas para los titulares o adjuntos.

D) Profesores honorarios

Art. 68. — (Designación.) Al profesor que se retire de la enseñanza podrá, en los casos de haberse destacado por su actuación científica, otorgársele el título de profesor honorario, por el consejo directivo, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros y con la aprobación del consejo universitario en igual forma. El título de profesor honorario es vitalicio. Sus funciones serán determinadas por las reglamentaciones de cada facultad, con la aprobación del consejo universitario.

E) De la retribución de los profesores

Art. 69. — (Remuneración mensual ordinaria.) Los profesores titulares gozarán de una remuneración mensual de 1.800 pesos moneda nacional, la que será aumentada cada cinco años en un 10 por ciento.

Art. 70. — (Remuneración mensual por dedicación exclusiva.) Los profesores a cargo de cátedras de consagración exclusiva, gozarán de una remuneración mensual de 3.500 pesos moneda nacional, la que será aumentada cada diez años en un 10 por ciento, no pudiendo percibir ninguna otra remuneración, cualquiera sea la función que desempeñe dentro de la universidad.

Art. 71. — (Fijación de las retribuciones de los titulares.) En los casos en que un profesor titular hiciera expresa manifestación de querer consagrarse exclusivamente a la enseñanza, los consejos directivos por dos tercios de votos podrán, si lo encontrasen conveniente, aceptar este ofrecimiento, en cuyo caso gozará de la misma retribución fijada en el artículo anterior.

Art. 72. — (Retribución de los adjuntos.) En las cátedras establecidas por la facultad como dedicación exclusiva, los profesores adjuntos asistentes gozarán de una remuneración mensual de \$ 1.500 moneda nacional; los demás profesores adjuntos asistentes gozarán de una remuneración mensual de \$ 800 moneda nacional.

F) De la carrera docente y científica

Art. 73. — (Bases de la carrera docente.) Cada facultad reglamentará su carrera docente ajustándose a las siguientes bases:

- a) El aspirante a profesor universitario cursará un período de adscripción a una determinada cátedra, durante el cual realizará trabajos de investigación o de seminario en materias afines, bajo la dirección del respectivo profesor, y ejercicios docentes en la materia de su adscripción; completará su preparación con cursos obligatorios sobre materias de cultura general. Podrán implantarse o no, según las características

de cada facultad, exámenes finales para la aprobación de las materias de adscripción;

- b) Cumplido esto, el aspirante a profesor pasará a ejercer la docencia complementaria bajo la dirección del profesor titular y durante el tiempo que fijará cada facultad para cada asignatura;
- c) Terminada esta etapa, y previo un examen o concurso general de competencia técnica y docente sobre la materia de su dedicación, será autorizado como docente;
- d) El docente autorizado tendrá las obligaciones que le fije cada facultad y un derecho de preferencia para presentarse a los concursos de profesor adjunto.

Art. 74. — (*Venia docendi*.) Todo egresado de la universidad, con diez o más años de ejercicio profesional, que reúna trabajos, títulos y antecedentes científicos suficientes, podrá solicitar al consejo directivo un permiso para enseñar, y cumplidos los requisitos exigidos para demostrar su capacidad docente y preparación técnica, que establecerá cada facultad, le conferirá la *venia docendi*, es decir, el permiso para enseñar en forma regular y sistemática. Sus antecedentes serán tenidos en cuenta para autorizar su inscripción en los concursos de profesor adjunto.

La forma regular y sistemática de la enseñanza del *venia docendi*, será reglamentada por cada facultad.

Art. 75. — (Carrera de investigadores.) Cada facultad organizará la formación regular y metódica de los investigadores dedicados exclusivamente a trabajar por el progreso de la ciencia.

G) Del claustro universitario

Art. 76. — (Composición.) Constituyen el claustro general de profesores de cada facultad todos los catedráticos, más un número de profesores adjuntos elegidos por sorteo, en una proporción igual a la tercera parte de los catedráticos de cada facultad. La asistencia a las reuniones de los claustros es obligatoria.

Art. 77. — (Reunión anual.) El decano podrá citar al claustro general a fin de dar lectura a la memoria anual. Podrán constituirse también claustros parciales de las diversas escuelas, por separado, bajo la presidencia del decano, para considerar exclusivamente los resultados del plan de estudios y las reformas técnicas que se sugieran.

Art. 78. — (Facultades.) Las sugerencias del claustro serán consideradas por el decano y el consejo directivo de la facultad, para resolver sobre su viabilidad. El claustro no tratará, bajo ningún concepto, cuestiones ajenas al plan de estudios y al desarrollo de la enseñanza. El claustro podrá también ser consultado por escrito.

TITULO IV

De los estudiantes

A) Categorías

Art. 79. — (Estudiantes regulares.) Los estudiantes serán regulares y libres. Los primeros deberán asistir obligatoriamente para mantener su situación de tales, a las clases teóricas o prácticas y trabajos universi-

tarios, en la proporción que fije cada facultad. Son los únicos que pueden obtener becas.

Art. 80. — (Estudiantes libres.) Son estudiantes libres los que inscritos en la universidad no cumplan los requisitos necesarios para conservar el carácter de regulares.

El estudiante libre rendirá examen en las siguientes condiciones:

- 1ª La prueba teórica no podrá durar menos de media hora;
- 2ª En caso de prueba práctica, se acreditará, a satisfacción del tribunal examinador, grado suficiente de preparación en la materia. Esta prueba es eliminatoria;
- 3ª El examen teórico se hará con el programa oficial íntegro de la asignatura de que se trate, pudiendo el tribunal examinador elegir el tema o temas dentro del programa sobre el que deberá disertar el alumno.

Art. 81. — (Estudiantes vocacionales.) Todo egresado en una carrera universitaria podrá inscribirse en cualquier asignatura de cualquier facultad sin rendir examen de ingreso. Los estudiantes quedarán sometidos exclusivamente a las restricciones de correlación de estudios que establecerá la universidad.

Art. 82. — (Estudiantes vocacionales.) Los estudiantes inscritos en estas condiciones podrán rendir examen sometiéndose a las reglamentaciones vigentes para los alumnos regulares o libres, según la categoría que adopten; en las actas respectivas se hará constar su calidad de *alumno vocacional*.

Art. 83. — Los alumnos vocacionales podrán pedir certificado de las asignaturas aprobadas, y si su conjunto alcanzase a una carrera completa tendrán derecho al título profesional respectivo.

Art. 84. — El consejo universitario reglamentará las correlaciones de materias indispensables para autorizar la inscripción en cada asignatura determinada, con el objeto de evitar que se intente afrontar estudios sin bases preliminares insubstituíbles.

Esta correlación será dictada con la mayor liberalidad posible, tendiente a no restringir la ampliación de técnica y de cultura que se deriva de esta libre elección de estudios superiores.

B) De su representación

Art. 85. — Los estudiantes tendrán representación en los consejos directivos por intermedio de un delegado por cada escuela.

Art. 86. — El alumno que hubiera obtenido las más altas calificaciones en el transcurso de su carrera y se encuentre cursando el último año tendrá el carácter de representante estudiantil. Este cargo es irrenunciable, salvo causa justificada a juicio del consejo.

Art. 87. — En el caso de que hubiere dos o más alumnos con las mismas clasificaciones, se sorteará entre ellos el que deba ejercer la representación estudiantil.

Art. 88. — El delegado será especialmente convocado a las sesiones que celebre el consejo directivo para tratar problemas inherentes a la vida de relación de los estudiantes con la facultad. En dichas sesiones el delegado podrá expresar libremente el anhelo de sus

representados, no teniendo voto en las decisiones que adopte el consejo.

C) De las becas

Art. 89. — El Estado creará becas para la enseñanza gratuita, cuya distribución entre las diversas universidades de la Nación se hará por el Poder Ejecutivo. Para proceder a dicha distribución, se tendrán en cuenta las características y necesidades regionales, sociales, económicas y culturales, referidas a cada universidad, procurando que con la concesión de becas se cumplan, de la manera más acabada posible y con un sentido social, los fines asignados a la universidad.

Habrà dos clases de becas: las de estudios y las de estímulo. Las primeras se concederán a los estudiantes sin recursos económicos; las segundas, a estudiantes destacados, de familia obrera o de empleados, para compensar la privación total o parcial de aporte económico al hogar, que les imponga el estudio.

D) Concesión y pérdida de becas

Art. 90. — (Solicitud de becas.) Las peticiones de becas serán dirigidas al Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, con los antecedentes tendientes a justificarlas, y serán resueltas, previas las informaciones del caso y las circunstancias del mismo, concediendo la clase de beca que corresponda.

Art. 91. — (Pérdida de las becas.) La condición de becario se pierde:

- 1º Por ser aplazado más de dos veces en una misma materia o en la mitad más una de un mismo curso;
- 2º Por observar mala conducta pública, dentro o fuera de la universidad o por realizar dentro de ella actividades políticas;
- 3º Por haber sido objeto de medidas disciplinarias;
- 4º Por inasistencia reiterada e injustificada a las clases o incumplimiento repetido de las tareas universitarias;
- 5º Por haber falseado los elementos de juicio que invocó para solicitar la beca;
- 6º Por haber desaparecido las condiciones de necesidad acreditadas al solicitar la beca.

La cancelación se hará por el rector. Al alumno a quien le fuere cancelada la beca, no se le otorgará ninguna otra en ninguna de las universidades de la Nación, salvo el caso del inciso 6º del artículo presente.

Art. 92. — (Otras becas.) Las becas otorgadas por el Estado no excluyen aquellas otras que puedan crearse u otorgarse por otras entidades o personas. Las que fueran de entidades o instituciones públicas oficiales o semioficiales, deberán ajustarse en lo posible, al espíritu de las presentes disposiciones.

Art. 93. — (Pérdida de la condición de estudiante.) Perderá la condición de estudiante universitario, no pudiendo ingresar a ninguna otra universidad del país, todo alumno que incurriera en la misma causal de cesantía de los profesores, especificada en el inciso 1º del artículo 57 de la presente ley, sin perjuicio de las faltas y sanciones de orden disciplinario que establezca cada facultad en su reglamento interno.

TITULO V

De la enseñanza

A) Condiciones generales de ingreso

Art. 94. — (Atribuciones para la admisión de alumnos.) Las facultades fijarán las condiciones de admisibilidad para los estudiantes que ingresen a sus aulas.

Art. 95. — (Constancias.) Todo el que solicite ingresar a los cursos o rendir examen en las facultades, deberá acreditar tener aprobados los estudios que correspondan a la enseñanza media, normal o especial, de acuerdo con la reglamentación que establezca cada facultad.

Art. 96. — (Comprobación.) La comprobación a que se refiere el artículo anterior podrá hacerse:

- 1º Por certificado de los colegios nacionales;
- 2º Por certificado de institutos de enseñanza secundaria, debidamente autorizados;
- 3º Por certificados o diplomas de facultades o institutos oficiales extranjeros, debidamente legalizados, siempre que se acredite la reciprocidad con nuestra República.

Art. 97. — (Pruebas de competencia previas.) Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, las facultades podrán exigir estudios complementarios o pruebas de competencia, antes de aceptar la incorporación de alumnos a sus aulas.

Art. 98. — (Exámenes, clases y vacaciones.) La universidad fijará la fecha de comienzo y terminación de las clases y duración de las vacaciones y cada facultad reglamentará la fecha de los exámenes.

Art. 99. — (Propiedad y responsabilidad intelectual.) La responsabilidad científico-legal de las enseñanzas y doctrinas expuestas en clase, concierne exclusivamente a los profesores que la dicten y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual, artística o literaria de su enseñanza; todo ello, sin perjuicio de las medidas que puedan adoptar los consejos directivos, cuando se comprometa el decoro y la seriedad de los estudios o cuando se desvíe de los fines específicos de la universidad, o comprometa el prestigio de la misma o de las facultades.

Art. 100. — (Terminación de estudios y tesis.) No se otorgará diploma alguno a quien no haya aprobado todas las materias del plan de estudios de la respectiva carrera. Cuando un estudiante solicitare traslado para una facultad similar de distinta universidad, deberá requerir su diploma en aquella universidad donde hubiera aprobado más del 50 por ciento de las materias de su carrera. Para obtener el título de doctor deberá aprobarse un trabajo de investigación, que se llamará tesis de doctorado.

B) De la enseñanza libre

Art. 101. — (Autorización.) Podrán dictar circunstancialmente cursos libres, conferencias o lecciones sobre cualquier disciplina científica, previa autorización de la facultad respectiva y de acuerdo con su reglamento:

- 1º Los profesores universitarios;
- 2º Los diplomados, universitarios nacionales o extranjeros o personas de reconocida competencia.

La enseñanza libre, sistemática y regular, les corresponde a los docentes autorizados y a los *venia docendi*.

C) De la enseñanza para graduados

Art. 102. — (Cursos y carreras de especialistas.) Las facultades reglamentarán la enseñanza para graduados, organizando cursos de perfeccionamiento de especialización y carrera de especialistas, con el objeto de propender a la formación de los técnicos que necesita el país en cada una de las ramas de las ciencias y de actualizar los conocimientos de los profesionales. Se le dedicará proferente atención a aquellas materias que no figuren en el plan de estudios para estudiantes.

TITULO VI

Del patrimonio de la universidad y su administración

A) De los bienes de la universidad

Art. 103. — (Patrimonio.) Forman el patrimonio de la universidad: el fondo universitario los bienes inmuebles, muebles, e inmateriales que en virtud de ley o por otro título, gratuito u oneroso, pasen al dominio de la universidad, así como las colecciones científicas, publicaciones y demás bienes que, actualmente o en el futuro, tengan las facultades, institutos o dependencias de la universidad.

B) De los recursos, donaciones y cuentas

Art. 104. — (Recursos en general.) Son recursos de la universidad:

- 1º El producido de las contribuciones que se establecen en la presente ley;
- 2º Las sumas que en cualquier concepto y forma se asignen por el presupuesto de la Nación a la universidad, facultades, institutos y establecimientos universitarios;
- 3º El producido de derechos arancelarios;
- 4º Los frutos, intereses y rentas de los bienes patrimoniales de la universidad;
- 5º Las rentas o donaciones de particulares en favor de la universidad, facultades, institutos o establecimientos universitarios;
- 6º Cualquier otro fondo que corresponda a la universidad.

Art. 105. — (Donaciones.) Cuando se trate de herencias, legados o donaciones o cualquier otra liberalidad en favor de las facultades, el consejo universitario no podrá pronunciarse sin oír a éstas y no podrá aceptar aquellas que las facultades decidan rechazar. Estas restricciones comprenden las condiciones o cargos que puedan imponer los testadores y benefactores. Aceptada una herencia, legado, donación u otra liberalidad, el contrato de donación no podrá ser modificado sin oír nuevamente a la facultad beneficiada.

Art. 106. — (Recaudación.) Salvo disposición especial del consejo universitario, todas las dependencias universitarias que recauden fondos los entregarán mensualmente a la tesorería de la universidad, cualquiera sea su procedencia, enviando al rector los documentos justificativos y explicativos del caso.

Igual cosa se hará, aun cuando los fondos tengan un destino especialmente determinado.

Art. 107. — (Gastos.) Ningún gasto o inversión de fondos podrá hacerse sin que se encuentre previsto en el presupuesto de la universidad u ordenado por el consejo universitario. Los pagos serán dispuestos por el rector, previa conformidad del contador, bajo la responsabilidad solidaria de los mismos, si contravinieren disposiciones legales.

El consejo universitario no podrá ordenar gasto alguno fuera del presupuesto, sin crear o tener el recurso. Será individualmente responsable de la violación de esta disposición, cada uno de los miembros que sancione el gasto.

Art. 108. — (Ingresos.) Todas las sumas destinadas a la universidad o a cualesquiera de sus partes integrantes ingresarán a los recursos generales de la universidad.

Los beneficios establecidos en el artículo 89 no serán satisfechos con los recursos enumerados en el artículo 104.

TITULO VII

De la dotación económica de las universidades

Art. 109. — (Recursos especiales.) Para la realización de sus fines las universidades nacionales contarán con los siguientes recursos:

- 1º Con los fondos que el Estado les asigne respectivamente, en el presupuesto nacional;
 - 2º Con el impuesto del uno y medio por ciento (1,5 %) que toda persona —de existencia física, ideal, con o sin personalidad jurídica, o sucesión indivisa— que empleare trabajo de otra, está obligada a satisfacer sobre el importe anual de los «sueldos» y «salarios», que abonare. Los «sueldos» y «salarios», sobre los que corresponderá ingresar el impuesto a que se ha hecho referencia precedentemente, se determinarán de acuerdo con lo establecido en el párrafo primero del artículo 2º del decreto ley 33.302/45 (ley 12.921).
- Quedan exentos de este impuesto los «sueldos» y «salarios», que se paguen al servicio doméstico y los abonados por los fiscos nacional, provinciales y municipales y los de las entidades que en su totalidad pertenezcan a los mismos;
- 3º Con los ingresos obtenidos por matrículas y otros conceptos universitarios;
 - 4º Con las donaciones o fundaciones que se hicieran a favor de las universidades;
 - 5º Con cualquier otro ingreso.

Art. 110. — (Aplicación, percepción y fiscalización del recurso especial.) La aplicación, percepción y fiscalización del impuesto a que se alude en el punto segundo del artículo 109 estará a cargo del Instituto Nacional de las Remuneraciones y se regirá, en lo pertinente, por las disposiciones del decreto ley 33.302/45 (ley 12.921) y demás disposiciones que complementen o modifiquen ese cuerpo legal, siendo facultad exclusiva del Poder Ejecutivo determinar cuáles de las citadas disposiciones serán de aplicación para el impuesto referido.

Art. 111. — (Forma y plazo para el pago.) Los responsables abonarán el impuesto establecido en el

punto segundo del artículo 109, mediante depósito en la cuenta Instituto Nacional de las Remuneraciones —Recursos Universitarios— del Banco Central, Banco de la Nación Argentina, o en los bancos particulares que a tales efectos habilite expresamente el Instituto Nacional de las Remuneraciones, o mediante cheque, giro o valor postal o bancario sobre Buenos Aires, a la orden del Instituto Nacional de las Remuneraciones —Recursos Universitarios— dentro de los plazos que, anualmente o en períodos menores, establecerá el Poder Ejecutivo.

Carecerá de valor todo pago que no se efectúe en alguna de las formas indicadas precedentemente.

El Poder Ejecutivo queda facultado para exigir de los empleadores —en los casos que crea oportuno— anticipos a cuenta del importe que, en definitiva, deban ingresar aquéllos en concepto del impuesto que se establece en el punto segundo del artículo 109.

Art. 112. — (Distribución del producido del impuesto.) El producido de este impuesto será distribuido en el presupuesto nacional según las necesidades de cada universidad nacional, atendidas las circunstancias peculiares de la región o provincia en que se hallaren, número de alumnos y de profesores y demás factores que hubieren de tenerse en cuenta a efecto de que se desarrollen con un sentido social las funciones que les están asignadas.

TITULO VIII

Del Consejo Nacional Universitario

Art. 113. — Créase el Consejo Nacional Universitario, el que estará constituido por los rectores de todas las universidades del país y será presidido por el ministro de Justicia e Instrucción Pública.

Art. 114. — El Consejo Nacional Universitario tendrá los siguientes deberes:

- 1º Coordinar la obra docente, cultural y científica de las universidades, de modo que consulte los intereses y problemas del país y de cada región universitaria;
- 2º Asesorar al gobierno en todos los asuntos relativos a la actividad universitaria, especialmente en la creación, supresión o transformación de universidades e institutos superiores;
- 3º Amortizar y en lo posible uniformar los planes de estudio, títulos a otorgar y condiciones de ingreso para la misma carrera.

TITULO IX

Disposiciones complementarias y transitorias

Art. 115. — Los profesores que revisten como tales a la fecha en que entre en vigencia esta ley, quedan confirmados en sus respectivos cargos.

Art. 116. — Las autoridades de las respectivas facultades podrán, por esta única vez, prescindir del régimen especial de la carrera docente respecto de los aspirantes a profesores adjuntos que, dentro de los 180 días de la promulgación de esta ley, opten por el ingreso al profesorado, previo examen de competencia o concurso de títulos, que reglamentarán las respectivas facultades.

Art. 117. — La antigüedad en la cátedra, a los efectos de las bonificaciones previstas en los artículos 69 y 70, comenzará a contarse desde la fecha del nombramiento efectuado por el Poder Ejecutivo.

Art. 118. — El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato la confección de nuevos presupuestos para las universidades nacionales, de acuerdo a las disposiciones de la presente ley.

Art. 119. — El Poder Ejecutivo tomará las providencias necesarias para que las autoridades se constituyan de acuerdo a las disposiciones de la presente ley.

Art. 120. — Esta ley se aplicará desde su vigencia en la Universidad Nacional de La Plata, en todo cuanto no se oponga a las disposiciones del convenio celebrado el 12 de agosto de 1905, entre el gobierno de la Nación y el de la provincia.

El Poder Ejecutivo de la Nación adoptará las medidas necesarias para la modificación del referido convenio, en condiciones que permitan la inclusión integral de la Universidad Nacional de La Plata en el régimen establecido por la presente ley universitaria.

Mientras tanto, las autoridades de la Universidad de La Plata procederán a la adaptación de su organización y funcionamiento con los principios y disposiciones de la presente ley.

Art. 121. — Todas las universidades existentes o a crearse, salvo la excepción del artículo 120, se regirán por la presente ley, que entrará en vigencia el 1º de enero de 1948, quedando —desde ese momento— derogada toda disposición que se oponga a su cumplimiento.

Art. 122. — Hasta tanto el consejo directivo de cada facultad fije la proporción de consejeros de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24, se mantendrá la composición de los mismos en la forma actualmente existente.

Art. 123. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Bavio). — En consideración en general.

Sr. Soler. — Pido la palabra, para formular moción en el sentido de que el Honorable Senado pase a un cuarto intermedio, por breves minutos, antes de entrar a considerar el proyecto de régimen universitario.

Sr. Saadi. — Por mi parte, hago indicación para que, si no hay razón de fuerza mayor que se oponga a ello, entremos a considerar inmediatamente el proyecto de referencia, sin que el Honorable Senado pase a cuarto intermedio. Recordaré que el proyecto sobre régimen universitario es de suma trascendencia; profesores y alumnos lo reclaman con justa razón y es menester que quede sancionado cuanto antes. Además, el Senado está abocado a la consideración de otros asuntos, razón por la cual solicito al señor senador por Mendoza que retirara su moción.

Sr. Ramella. — Apoyo la indicación del señor senador por Catamarca.

Sr. Soler. — Retiro, entonces, señor presidente, la moción que había formulado.

18

PREFERENCIA

Sr. Vallejo. — ¿Si me permite el señor senador, y con la venia de la Presidencia? Mientras el señor senador por Mendoza ordena la documentación para su informe, voy a formular una indicación, que ya he consultado con algunos miembros de la Comisión de Salud Pública. Se trata de un proyecto, venido en revisión, que ha merecido el auspicio general por parte de todos los sectores de la Cámara de Diputados, por el cual se crea un instituto para el estudio y tratamiento de la parálisis infantil. Es un proyecto original de un prestigioso médico argentino el doctor Félix Liceaga, a quien conozco desde hace cerca de 40 años, que ha realizado un estudio minucioso de la materia y que, como he dicho, ha merecido el elogio general de todos los sectores de la Cámara de Diputados. Y no podría ser menos, es el fruto de un prestigioso facultativo que desde su niñez, podría decirse, cuando estudiante, vivía con la preocupación de aliviar a los niños enfermos, era practicante ayudante del prestigioso profesor doctor Ricardo Gutiérrez, a quien con su proyecto, rinde también un homenaje, dándole su nombre al instituto.

Como se trata de un asunto fundamental que tengo entendido han empezado a estudiar ya las dos comisiones a las que ha sido girado el proyecto, solicitaría del cuerpo que fijara la sesión próxima para considerarlo. Recojo así a la vez, gustoso la indicación del señor diputado Pastor, de darle toda la importancia de este simpático proyecto del doctor Liceaga.

Sr. Tascheret. — Pido la palabra.

Como presidente de la Comisión de Salud Pública debo informar que el proyecto de ley venido en revisión y a que se ha referido el señor senador por La Rioja ha tenido entrada esta semana. La comisión le dedica toda la atención que la importancia del asunto requiere y hará cuanto esté de su parte para despacharlo en la sesión del miércoles venidero.

Sr. Vallejo. — Por mi parte agradecería mucho la preferente atención que se dedique a este importante proyecto de que es autor el señor diputado, doctor Liceaga.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Bavio). — En consideración la indicación formulada por el señor senador por La Rioja. Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

19

REGIMEN UNIVERSITARIO

Sr. Soler. — Pido la palabra.

Voy a informar, señor presidente, el proyecto de ley, venido en revisión, de la Honorable Cámara de Diputados sobre régimen universitario. Lo hago en sustitución del señor presidente de la Comisión de Instrucción Pública de este honorable cuerpo que, desgraciadamente, se encuentra enfermo, e impedido de concurrir a cumplir su cometido y que sin duda hubiera sido una gran satisfacción para él poder hacerlo.

Trataré de ser, dentro de la relatividad de las cosas, lo más conciso posible, ya que el tiempo es escaso; pero el problema es para nosotros de tan trascendental importancia que requiere una serena consideración.

La reforma universitaria viene siendo un problema desde muchos años atrás. Me tocó participar en la generación de universitarios que lucharon tenazmente para conseguir la reforma universitaria en la ciudad de Buenos Aires, pero debo reconocer que años atrás esa reforma fué iniciada y ardientemente defendida por los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, y nosotros no fuimos más que unos continuadores de ella. Cabe el honor, entonces, a esos valientes muchachos de la Universidad Nacional de Córdoba, de haber encendido la tea que trajo y produjo lo que llamamos en aquel entonces la reforma universitaria. Por ella obtuvimos muchas reformas beneficiosas, como fué la de desplazar a profesores inútiles que teníamos en la facultad, y a muchos de los cuales se los mantenía única y exclusivamente para que pudieran tener la vanidad de ser profesores, pero no porque esa asignatura fuese apropiada para la carrera ni porque ellos tuvieran condiciones didácticas para ser profesores.

Se produjo también una innovación que a nuestro entender fué magnífica: la participación del estudiantado en el manejo de la universidad, dándole representación en los consejos universitarios.

Muchas veces, señor presidente, cuando se busca un remedio, una solución inmediata, nace la patología de esa solución. Se ven en seguida las desviaciones y se ven los defectos e inconvenientes, y al tratar de subsanar un mal, desgraciadamente ese remedio engendra otro. Con respecto al gran paso de la reforma universitaria, en el sentido de dar representación en los consejos directivos de las respectivas facultades a los estudiantes, hemos visto con dolor, los hombres que defendimos ardientemente este principio de que las universidades debían ser manejadas por los estudiantes —ya que a ellos los beneficiaba, y por lo tanto deberían tener

derecho a la estructuración y hasta al gobierno de la misma—, hemos visto, repito, después de unos cuantos años de práctica, que nos habíamos equivocado. La patología nacida de ese hecho ha sido quizás tan perjudicial como el mal que nosotros queríamos remediar, y la participación del estudiante en los consejos, ha traído una desviación que nos ha perjudicado en la enseñanza. Hemos observado la puja de los candidatos a consejeros de las facultades, para conquistarse la voluntad del estudiantado, y hemos visto, sobre todo en la Facultad de Medicina, costear campañas electorales en los centros de estudiantes con el propósito de conseguir cierto número de electores, afines a ciertos candidatos a profesores titulares para que después, en el consejo, pudieran ser consagrados como tales.

Sabemos que ocurrían desviaciones de tal naturaleza, que ya en la jerga universitaria solían oírse manifestaciones como las siguientes: «La cátedra titular de tal asignatura me va a costar 30.000 pesos», o «A fulano de tal la cátedra le ha costado 35.000 pesos». No es que la compraran, señor presidente, o que se vendieran, sino que las campañas electorales para conseguir un consejo favorable, les costaba tantos miles de pesos.

Por supuesto que en las facultades ese procedimiento para llegar a ser profesor titular o suplente de una asignatura dada, tiene que ser doloroso, pero para la Facultad de Medicina es doblemente doloroso. No es posible admitir que pueda haber un médico que haya conseguido una cátedra por estos procedimientos, en lugar de obtenerla en base a su capacidad y preparación. Y nosotros buscamos ahora eso, señor presidente, que vayan a la cátedra hombres de capacidad y de preparación.

No queremos que se inmiscuya en lo más mínimo la política en las facultades; me refiero a la política externa, la política de partidos, la política de lucha en las calles para la conquista del poder y tampoco queremos que se persista en el viejo sistema de la política interna en las universidades, esa política de núcleo, esa política asfixiante a consecuencia de la cual el profesor que no formaba parte del núcleo predominante en la facultad, por más capacidad y condiciones que tuviera, no llegaba jamás a titular de la cátedra, pero, en cambio, la conseguía cualquier obsecuente que formara parte de ese núcleo que, generalmente, estaba constituido por muy pocos personas predominantes en cada universidad y en cada facultad.

Es necesario, pues, terminar con la política banderiza y partidista, que es apasionante y funesta a la universidad, lo mismo que con la política de círculo, de intereses creados y mancomunados, constituidos por núcleos de hombres «selectos», ya que hemos tenido una universidad de corte aristocrático, señor presiden-

te, y es un mito que hayan podido estudiar en ella los hombres humildes. Generalmente los estudiantes de nuestras universidades —con raras y meritorias excepciones— son hijos de familias acomodadas, que han llegado a la facultad, luego, por esos procedimientos, al profesorado, y formaron una especie de casta privilegiada y directriz, que se ha apoderado de las mismas haciendo política en su exclusivo beneficio, y olvidando los intereses de los alumnos, que tenían obligación de cuidar.

Y el epílogo de estos hechos, señor presidente, acaba de producirse en estos años próximos pasados, cuando vimos al profesorado de las universidades erguirse en un solo haz, contra las pretensiones del pueblo trabajador argentino de querer reivindicar sus derechos sociales. Y he visto, también, dolorosamente, que la inmensa mayoría de los médicos de nuestra República estaban en contra del movimiento de recuperación de nuestras clases sociales humildes, y digo dolorosamente, porque si hay un profesional que debe saber cómo sufre el pueblo; que debe saber las condiciones de vivienda que tiene nuestro pueblo trabajador, que debe saber la escasez de salarios que tenía ese pueblo y conocer en la condición de paria con que se le trataba, es, justamente el médico, quien por su profesión, al recorrer todos los ranchos, puede comprobar la promiscuidad y la miseria que hay en muchos hogares argentinos, producto del salario escaso y de la situación de bestias humanas en que hasta ahora, se los tenía sumidos. Y esos señores universitarios que salían de esa casta, dejaban a un lado los sentimientos humanos, con tal de defender sus sentimientos de casta privilegiada.

Hemos visto que la inmensa mayoría de los profesionales del país, ha estado en contra de este movimiento reivindicatorio de justicia para el pueblo. Ahora se están dando cuenta del error; se les abren los ojos y están comprendiendo el camino que deben seguir. Por eso, muchos profesionales han tomado como bandera, la de la reivindicación, y nos están acompañando en el esfuerzo para conseguir beneficios para el pueblo.

Esa universidad privilegiada y de casta debe desaparecer, y debe desaparecer, para dar cabida a la universidad del pueblo, para que éste pueda llegar a ella para instruirse, para capacitarse. La universidad no debe ser para un círculo determinado de gente privilegiada. La universidad debe descender de ese peldaño de jerarquía del privilegio y colocarse al nivel del pueblo, y poder convivir con él y serle útil. La única jerarquía que podemos admitir en nuestras universidades es la científica, y la universidad argentina debe rayar en la altura por esta jerarquía científica, pero no por la del privilegio mantenido por cabezas huecas, y seres fa-

tuos, envanecidos por el alto cargo que habían ocupado y que a menudo era producto de maquinaciones de grupo, y no de preparación científica.

Y así vamos, señor presidente, a que la universidad cumpla el papel que debe llenar en nuestro medio para que eduque a nuestro soberano; para que todo el mundo pueda concurrir a ella y por eso debemos democratizarla. Debemos hacerlo así, no subvirtiendo los valores desde ningún punto de vista, sino ayudando a los verdaderos valores para que vayan a ocupar las posiciones que les corresponde. Por eso es que esta ley universitaria establece que los que nombran los profesores son los claustros universitarios. Ellos son los que deben constituirse, reunirse y designar a los profesores, previo concurso de competencia; y el Poder Ejecutivo no tendrá ningún inconveniente en confirmar el nombramiento de profesores, siempre que hayan satisfecho los requisitos legales que se establecen en la misma ley.

En esa forma, iremos escalonando la verdadera organización universitaria de nuestro país. El alumnado, de acuerdo con la ley que programamos va a tener, también, interés en el manejo de su universidad, pero no va a poder hacer política en la misma. Ni el profesor podrá tomar su cátedra como baluarte político, ni el alumno podrá tampoco tomar la institución universitaria como centro de sus simpatías partidarias.

La aspiración actual de nuestro gobierno, encarnada por el excelentísimo señor presidente, general Perón, es que el alumno debe dedicarse a estudiar, a aprender y no debe distraer ni un solo minuto de su vida en otras tareas que no sean las de instruirse en esa alta casa de estudios, para llegar a ser, en verdad, un hombre de capacidad y un hombre de bien y de provecho.

Desde luego, cuando haya terminado su carrera, que participe, en buena hora, de la lucha cívica que bastante falta le hace al país. Pero mientras tanto, no queremos que se desvíe del fin al cual está destinado. Y es por eso, que hemos estructurado la representación universitaria del estudiantado, suprimiendo la elección directa como se hacía antes, y se ha buscado la representación indirecta. Habrá delegados en las universidades que representarán a los estudiantes y éstos serán elegidos entre los diez mejores alumnos de cada facultad. Había la idea de elegir el mejor estudiante de cada facultad, pero, para evitar que esto pueda prestarse a maniobras, se ha modificado en el sentido de que el profesorado no pueda beneficiar a un alumno en medio, un cuarto o un punto, para hacerle ocupar el primer puesto y, por lo tanto, ser delegado estudiantil. Hemos establecido que, de entre los diez mejores alumnos, se sorteará el delegado que ha de ir a los consejos universita-

rios para que allí haga oír las ansiedades y las aspiraciones del estudiantado de su facultad.

En esa forma queremos darle representación a los estudiantes en los consejos, sin que tengan que distraer su tiempo en política de grupos, siendo ésta la patología que había nacido a consecuencia de la reforma universitaria que con tanto anhelo y ahinco nosotros habíamos defendido.

En el proyecto de ley que consideramos, se establece que el rector será designado por el Poder Ejecutivo de la Nación, y los decanos por los consejos directivos de cada facultad, seleccionados de una terna que propondrá el mismo rector.

¿Qué objeto tiene esto, señor presidente? Nosotros aspiramos y queremos que los rectores de las distintas universidades del país sean designados por el Poder Ejecutivo de la Nación, porque comprendemos que él es el responsable de guiar a la Nación, de orientarla, de llevar la nave del Estado a feliz puerto; y si tiene esa responsabilidad, debe, también, tener el derecho de elegir los hombres que han de ir a representar esa orientación del gobierno para que las universidades no marchen en discordancia con el Ejecutivo, y no nos suceda lo que ha estado pasando estos años, que mientras el gobierno de la Nación, por medio de su Ejecutivo, iba por una senda, las universidades tomaban sendas completamente contrarias.

Es necesario que la enseñanza de la juventud sea orientada de acuerdo con los principios sociales, económicos y políticos del gobierno de la Nación.

Esto no quiere decir que se ha de llevar la anarquía a la universidad y que a cada instante se cambie de rumbo. No, señor presidente. Lo que se desea es que se marche al mismo ritmo y que se camine con el mismo paso en que esté caminando, en un momento determinado, el pueblo de la Nación, para evitar lo que nos acaba de suceder, que mientras el pueblo tenía una aspiración, que era de reivindicación y mejoramiento social, las universidades, manejadas por espíritus contrarios y opuestos a esta manera de pensar, quisieron llevar a la juventud hacia un camino opuesto.

Ese es el motivo por el cual se propone que el rector sea designado por el Poder Ejecutivo.

Sr. Ramella. — ¿Si me permite una interrupción, el señor senador

Sr. Soler. — Con mucho gusto, señor senador.

Sr. Ramella. — También, por expresa disposición constitucional, los empleados deben ser nombrados por el presidente de la República. Y se había anotado en la Cámara de Diputados con acierto, que, en realidad, en la práctica, a pesar de lo que disponían los estatutos universitarios, el presidente era el que hacía, en última instancia, el nombramiento de los rec-

tores, porque siempre se le iba a buscar, como se dice, la media palabra para su designación.

Muchas gracias, señor senador.

Sr. Soler. — Pero, en realidad, era un principio vicioso y perjudicial, que en la práctica —y la prueba la hemos tenido en la universidad en los años 1943, 1944 y 1945—, se marchaba a destiempo con el Poder Ejecutivo de la Nación. Y no sería lo más importante esto, sino que hicieron intervenir al alumnado para la defensa de intereses bastardos, que no tenían relación con sus estudios, apoyándose sobre los mismos y tratando de introducir la anarquía dentro del país.

Esas cosas, trataremos de que no vuelvan a producirse; y para demostrar que tenemos un sentido cabal de la responsabilidad y de los intereses que manejan las facultades, es que el gobierno de la misma no se reduce solamente a un decanato o a un rectorado, sino que está basado en los consejos universitarios constituidos por profesores de la casa, que son los que han de legislar y reglamentar la vida y subsistencia de la misma, siempre supervisado por el rector, que forma parte, inclusive, de ese consejo, o del decano que también forma parte de él.

Nosotros le damos participación al profesorado para que colabore en la organización de la Universidad y de las facultades, y sean ellos los responsables de la marcha de la misma.

No hemos querido, en ningún momento, cercenar a los profesores sus facultades, sino que no se introduzcan en los claustros universitarios intereses de grupos y que los jóvenes no sean aprovechados para fines ajenos a la Universidad.

Hemos visto, señor presidente, cómo se han ido fundando las universidades argentinas. La más antigua, la de Córdoba, después la de Buenos Aires, La Plata, Litoral, Tucumán y la última, la de Cuyo. Hemos observado cómo han ido naciendo las distintas universidades y esperamos ver crear muchas más, porque hacen falta.

Formulamos una estructuración de facultad en cuanto a la faz de la ciencia, pero también vamos hacia «el instituto» en cuanto a la especialización e investigación científicas. Se han de crear juntamente con aquéllas, las facultades y universidades industriales del país, para poder suministrar a la Nación la mano de obra especializada de que tanto se está careciendo en la actualidad, e iremos llevando al pueblo hacia la universidad en forma que puedan llegar a cursar estudios aquellos que no lo hagan solamente con una mira de alta especulación científica, sino para capacitarse como hombres prácticos para la lucha por la vida y realizar la industrialización del país.

Pero con el crecimiento de estas facultades y universidades fué desarrollándose la anarquía universitaria y, al mismo tiempo, se fué produciendo una intensa competencia universitaria, que trajo como consecuencia que nos encontráramos con las universidades de Buenos Aires, La Plata, del Litoral, de Tucumán y la de Cuyo, estructuradas en base a sus propios planes y bajo sus propias ideas, sin mantener coordinación entre sí.

Nosotros necesitamos que haya distintas universidades, y distintas facultades en el país; pero, por sobre todo, necesitamos que haya una universidad eminentemente argentina. Debemos hablar de la Universidad de Córdoba, de la de Buenos Aires, de la de La Plata, de la del Litoral; pero dentro del contenido de unidad de la universidad argentina. Debemos tener distintas universidades con tópicos y principios uniformes, y les dejaremos amplitud de miras para que el profesor pueda desarrollar todo su esfuerzo y trabajo, dándole facultades suficientes para hacer programas elásticos, tan elásticos como la profundidad de sus conocimientos sea necesario.

Tenemos que terminar, de una vez por todas, con la anarquía y la rivalidad de nuestras universidades. Hoy, un joven que quiera ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene que rendir examen de ingreso; pero si quiere ingresar a la de La Plata, o a la de Córdoba, no necesita rendir ingreso, o por lo menos no lo necesitaba hasta ahora. ¿Y por qué ese privilegio de que la Universidad de Buenos Aires exija el examen de ingreso y las otras no?

Siendo yo estudiante —y esa fué una de las conquistas de la reforma— pedimos que se estableciera el examen de ingreso en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, porque lo interpretábamos como un principio de selección. Me acuerdo que de mi promoción ingresamos como 600 alumnos en primer año de medicina para caer, la mayoría, después, en segundo año, abatidos por una asignatura que la llamábamos «el puente del burro», la anatomía descriptiva, y en la cual se estrellaban los estudiantes de medicina. Tanto es así que, cuando conseguíamos aprobar esa asignatura nos abrazábamos porque ya nos considerábamos médicos, porque considerábamos que ya no teníamos ninguna barrera que se opusiera a la obtención del título. Pero el que tenía la desgracia de quedar aplazado en un primer examen, insistía en una segunda instancia, y, a veces, en una tercera, para después tener que abandonar sus estudios. ¿Qué porvenir se les presentaba a estos jóvenes? El de ser unos fracasados permanentes para la vida, que no servían ni para la facultad ni para orientarse nuevamente.

Para evitar eso, pedimos que se estableciera el examen de ingreso, porque mediante él, el que no tuviera aptitudes para la carrera no tendría que estar malgastando sus años ni haciéndole gastar a su familia dinero sin provecho.

Pero ¿qué pasó? Se hizo la selección en la Facultad de Medicina de Buenos Aires mediante el examen de ingreso, pero en las otras universidades no la establecieron. ¿Con qué fin? Con el de quitarse los alumnos, con el de la competencia.

Creemos que en todas las facultades deben regir los mismos principios para el ingreso y yo soy partidario de que se debe orientar en tal forma el título habilitante de la enseñanza secundaria que haga innecesario rendir examen de selección. Pero mientras esto no suceda, es necesario que tengamos uniformidad en el ingreso a todas las facultades argentinas...

Sr. Herrera. — Para que no haya rivalidades.

Sr. Soler. — ...para que no haya competencia ni rivalidades, efectivamente.

En la Universidad de Buenos Aires y en la de Cuyo se exige ser maestro o bachiller para ingresar al profesorado de lenguas vivas, mientras que en la Universidad de Córdoba, para los mismos estudios, es título habilitante el certificado de sexto grado de las escuelas comunes. Sin embargo, el título que reciben al terminar sus estudios es equivalente.

Aspiramos también a que los planes de estudios sean iguales en todas partes; que termine de una vez la anarquía de que en algunas facultades sean cuatro los años de estudio para recibirse de abogado y en otras seis, cuando el título que se expide también es el mismo; y aspiramos a que para una misma carrera se estudien las mismas asignaturas. Hay facultades de abogacía en las que no se estudian algunas materias que se exigen en otras facultades, a pesar de lo cual el título que reciben los habilita para el ejercicio de la profesión en cualquier región de la República.

Somos tan semejantes los argentinos de las distintas regiones del país, que no puede haber esa diferenciación, ni espiritual, ni racial, como para distinguir una universidad de otra. Por eso he dicho que la universidad debe ser eminentemente argentina, así funcione en Buenos Aires, en la Patagonia o en La Quiaca.

Ha dicho nuestro presidente, en sus manifestaciones diarias, que él aspira a que la universidad sea eminentemente popular, como lo he señalado ya en esta exposición; que el pueblo tenga las posibilidades de llegar a la facultad. Como las condiciones económicas de los hogares modestos son precarias, si el Estado no concurre a ayudar a esos hogares, los jóvenes de los mismos no podrán llegar a la univer-

sidad; y nosotros queremos, interpretando el pensamiento de nuestro presidente y el de la revolución, que todo ciudadano argentino tenga las mismas posibilidades de estudiar, a fin de que desaparezca la situación imperante hasta ahora, de que sólo el hijo de hogares acomodados puede llegar a la universidad.

Queremos que las universidades se nutran de los aptos y de los que tengan condiciones para estudiar, sin tener en cuenta el factor económico de los distintos hogares. Hay que tratar de abrir las aulas al pueblo. Si el hijo de un obrero jornalizado demuestra tener más capacidad que el hijo de un adinerado, ese puesto en la universidad debe ser para el pobre y necesitado y no para el adinerado, ya que aquél podrá ser útil a la República, mientras que de éste la Nación no puede esperar nada.

A ese fin se llega por medio de la institución de becas, que nuestro presidente también explicó en su plan quinquenal: becas que serán dadas como estímulo para unos y para sufragar todos sus gastos para otros. Se establece en nuestro proyecto que el estudiante pobre capacitado entrará a la facultad y el Estado le costeará sus estudios, pero no solamente le pagará la manutención, los libros, los trabajos prácticos, el arancel universitario, los derechos del título que obtenga, sino que también un aporte para que pueda seguir manteniendo su hogar, si éste necesita del sueldo o jornal que el estudiante hubiera podido aportarle con su trabajo.

Hemos llegado a estructurar la beca con un concepto integral para que el estudiante capacitado y con vocación tenga el derecho y la posibilidad de concurrir a una facultad, para lo cual el Estado tiene la obligación de costearle sus estudios. Por eso establecemos el principio moral de que el estudiante que ha cumplido con el ciclo primario y se ha capacitado en la enseñanza secundaria, adquiere el derecho de ingresar a una facultad y que el Estado le costee los estudios universitarios si demuestra que tiene condiciones y talento para seguirlos con éxito.

Esta es para mí una gran conquista social por que cumplimos con la gran aspiración de igualar a los ciudadanos argentinos, si no en la riqueza, por lo menos en las posibilidades, y al conseguir esto llegamos al desiderátum de lo que debe ser una democracia.

Para coordinar las distintas universidades, la ley crea lo que llamamos un Consejo Nacional Universitario, constituido por todos los rectores de las universidades del país y presidido por el ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación. Este organismo será el coordinador de toda la estructura universitaria del país. Los rectores, reunidos con el ministro, que es la autoridad máxima de la instrucción pública, confeccionarán los planes de estudios y condiciones de ingreso, homologarán el otorgamiento

de títulos y, en fin, estructurar, lo que hemos deseado tanto, la verdadera universidad argentina.

Creo, señor presidente, que esta ley pueda contener aún errores, que tal vez no es perfecta, pero de esta ley a la de Avellaneda hay una gran diferencia, y representa un paso cierto en el camino del progreso.

Creo, señor presidente, que estamos viviendo horas históricas, horas de reestructuración de la Nación que se van a traducir en hechos fecundos para la patria y así como hemos trabajado para dignificar al obrero, cumpliendo todo lo que le hemos prometido para elevarlo en su condición social, nos preocupamos ahora por el intelectual, porque éste es un movimiento que no solamente comprende a los hombres de trabajo rudo, sino que también, junto a los obreros del músculo, agrupa a los obreros del intelecto y en fin a todos los hombres dispuestos a una acción encaminada al progreso del país.

Al mancomunar el esfuerzo de los hombres del músculo y del cerebro, hemos de llevar a la República Argentina al nivel intelectual y científico a que tiene derecho, porque debe ser la cabeza directriz del movimiento latinoamericano. Y como hombres que estamos empeñados en llevar a la República Argentina a tan alto nivel, no debemos descuidar la instrucción pública ni debemos descuidar nuestras universidades. Un pueblo progresa materialmente de acuerdo al trigo que produce, al número de cabezas de ganado que tiene, a las fábricas con que cuenta, pero no puede ser viril, culto y progresista si no cuida sus escuelas primarias, sus colegios secundarios y sus universidades. La República Argentina necesita muchas universidades, y cuantas más tengamos, más capacitación tendremos, y cuanto más capacitados seamos, más rayaremos en las alturas del intelecto, y nuestros corazones se abrirán con más afecto para que todos los pueblos del mundo compartan la dicha y la felicidad que Dios ha volcado en esta tierra para bien y prosperidad de la humanidad. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Herrera. — Pido la palabra.

Deseo apoyar, señor presidente, el proyecto que está en discusión y que el señor senador por Mendoza ha esclarecido con su palabra elocuente. Yo no haré sino seguir sus aguas, ya que en ellas he visto la estela luminosa que ha quedado reflejada esta tarde en este recinto.

Votaré este proyecto de ley, con las modificaciones que le introduce la comisión del Honorable Senado.

Como universitario y como argentino, quiero referirme en pocas palabras a los inmensos beneficios que el país espera recibir de la nueva estructuración de su enseñanza superior, no para hacer el elogio de las disposiciones del proyecto

de ley, en particular, ni la crítica menuda de las que se hacía necesario modificar, sino por expresar con profunda satisfacción de argentino y legislador, los motivos fundamentales por los cuales considero que debe ser aprobado.

La injerencia que por el proyecto, que tan bien ha explicado en general el señor senador por Mendoza, tiene el Poder Ejecutivo en la designación de las autoridades de la universidad, asegura que estas autoridades han de responder a las ideas y a las necesidades de su pueblo.

En efecto, siendo el gobierno de la Nación fiel expresión de la voluntad popular, los delegados de ese gobierno en la universidad, en lugar de ser ciegos y fríos funcionarios de una casa de estudio desvinculada de los problemas reales que afligen a la sociedad, han de tener como el pueblo y el gobierno que éste elige, un solo pensamiento, una sola dirección espiritual, un solo camino, iluminado por la justicia hacia la consecución de un porvenir mejor.

Cuando la clase dirigente se encuentra desvinculada de los anhelos generales, desconectada de la masa social, cuando en virtud de posiciones anacrónicas o de un liberalismo trasnochado esa clase directiva, su pensamiento y su conducta, es egoísta o indiferente a la realidad, y, por consiguiente, ajena a los anhelos de las multitudes, tienen que producirse fatalmente movimientos convulsivos de desequilibrio social, que, justos o injustos, producen serias perturbaciones en la marcha de la sociedad, y, en ese caso, es indispensable conjurar sus causas y no sus efectos.

Los gobernantes no son, señor presidente, como se ha dicho muchas veces, conductores de la voluntad de los pueblos, sino simplemente sus primeros intérpretes y sus primeros mandatarios; y cuando en ese pueblo se ha hecho carne la idea de que la enseñanza debe impartirse en beneficio de la colectividad entera y no de un grupo privilegiado que explota egoístamente su título profesional, es lógico que el Poder Ejecutivo designe las autoridades que han de imprimir esa nueva orientación a la cultura. Y es que el universitario, señor presidente, no debe ser un mero repetidor de textos anacrónicos y de doctrinas superadas por la realidad, egresando de una fábrica de títulos, sino que debe ser el nombre que a base de una enseñanza teórica y práctica, plena de actualidad económicosocial, sea dentro de la técnica que su especialidad le señale, un artífice de las soluciones del futuro y un modelo de conducta social en el ejercicio de su profesión.

Este es claramente el principal fin de la ley que tratamos; que lo que se aprenda no sirva únicamente para habilitar a un núcleo privilegiado para que se gane la vida al amparo de un título especializado, sino para que devuelva en

obras la enseñanza al pueblo mismo que la ha sostenido.

Este proyecto de ley dignifica al profesor con un estatuto que le permite desenvolverse decorosamente desde el punto de vista moral y material; lo primero porque asegura a todo estudiante la posibilidad de ingresar a la docencia, la efectividad de los concursos y la libertad en el ejercicio de su cátedra; lo último, porque retribuye convenientemente sus servicios, asegurando su tranquilidad económica, para que la docencia deje de ser una ayuda en el presupuesto de un hogar y sí una alta función que permita al profesor dedicarse plena, honesta y especialmente a la vocación de su vida.

Dignifica a la enseñanza, proporcionando los elementos indispensables de estudio, investigación y superación, y exigiendo del profesorado una máxima dedicación; y en este sentido, todos los sacrificios pecuniarios que se exijan al pueblo son pequeños porque en nuestra patria, aun por mucho tiempo, señores senadores, gobernar seguirá siendo, educar y civilizar.

Y dignifica también a los estudiantes, primeros e inmediatos destinatarios de la ley, como que ellos forman la universidad, porque sin educandos ésta no existe.

Por tanto, declaro que esta ley justa, que llena una necesidad sentida profundamente en el país, salvará a la universidad reformista y democrática, al corregir los viejos errores de los que muchos, como dice el señor senador por Mendoza, hemos sido culpables, por seguir nuestros sueños idealistas.

Así, se niega al voto a los estudiantes, eliminando un elemento de perturbación en la elección de las autoridades y de los docentes, que había producido la demagogia en el profesorado y la corrupción en el elemento estudiantil politiquero profesional, pero se les otorga el derecho a ser oídos por intermedio de alumnos calificados a cierta altura de la carrera en que han asimilado ya el conocimiento de la vida universitaria y la madurez de juicio como para ser fieles intérpretes de la voluntad de sus compañeros.

Se salvará a la universidad reformista y democrática, pues se mantienen vivos, como dijo el señor senador por Mendoza, los principios de justicia social que animaron a la juventud de América, que la proclamó desde 1918, desde Méjico, desde Río Grande al Sur, hasta el estrecho; a la juventud americana, señor presidente, que persiguió y amó los beneficios de la cultura, para que volvieran al pueblo que con su esfuerzo la había costado.

Y de esta manera, se proclama el principio de que es el pueblo mismo el que tiene derecho a entrar en la universidad, para que nunca la miseria y el conocimiento, como muy bien dijo el señor senador por Mendoza, para que nunca la miseria y el conocimiento —repito— se encuen-

tren totalmente separados, sino que éste, el conocimiento, sirva para mitigar a aquélla, la miseria, elevando la condición humana.

La universidad, señor presidente, mantenida por el pueblo, no es una hornalla para fabricar hombres egoístas que sólo sirvan sus vanidades y sus pasiones deleznales. Eso no quiere el pueblo. El pueblo, señor presidente, concebido como la unidad orgánica de la Nación, el pueblo, señor presidente, como unidad étnica y social, el pueblo como la multitud orgánica que define la nacionalidad. Y bien, ese pueblo así concebido, que anhela y sueña en sus sentimientos patrióticos y en sus ideales de mejoramiento económico y superación moral, ese pueblo quiere que la universidad argentina, que recibe su aliento y se nutre con su conciencia y sensibilidad, sea el laboratorio donde se formen los hombres de gobierno que han de regir y gobernar a la sociedad republicana; y sólo así, las clases directivas de un pueblo, serán el reflejo, el trasunto de su vida; ¡como del árbol al fruto!

La democracia, señor presidente, no es una palabra, no es una ley, no es un decreto; es una finalidad, es el límite de un largo proceso de educación y de cultura. Por eso, cuando los pueblos llegan a esa finalidad, que es educación y es cultura, la democracia existe orgánica, evolucionada, económica y humana, y ellos alcanzan su felicidad que es la suprema aspiración de los hombres y de los pueblos. Celebremos, entonces, señor presidente, esta ley, con íntimo regocijo y con fervor patriótico; saludémosla alborozados, como la esperanza del presente y la realidad venturosa del mañana.

He dicho. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!, en las bancas.*)

Sr. Gómez del Junco. — Pido la palabra.

Al tratar esta ley tan fundamental para la generación argentina que ha llegado al gobierno, creo que debemos hablar claramente, porque la reforma universitaria no pertenece a un partido político, sino a esta generación conducida por el general Perón, que sabe perfectamente interpretar el sentir de los hombres que han llegado, rodeándolo, al gobierno de la República.

Se ha hablado de reforma universitaria, y vamos a hacer un poco de memoria.

Las inquietudes de América latina corrieron como reguero de pólvora, y fué Córdoba, la Córdoba gloriosa del 18, la que tomó su bandera, estimulada por el gran conductor de aquella época, Hipólito Yrigoyen, padre y maestro de la juventud revolucionaria universitaria. Ha tenido después esa reforma, vicisitudes, vaivenes, triunfos y derrotas, pero, por suerte, esa generación ha llegado al gobierno, y desde las bancas del Senado, como desde las universidades, y desde los distintos rincones de la cátedra,

está anhelosa esperando que se materialice esa reforma.

El Senado de la Nación, al estudiar esta ley, lo ha hecho en forma minuciosa y profunda, tratando de interpretar el sentir de esa generación aunque nunca lo podremos hacer como lo hace su conductor, el general Perón. El dió las directivas en sus distintos discursos, y dijo: quiero la universidad para que se enseñe y para que se aprenda, pero quiero también que sea del pueblo y para el pueblo.

He ahí que con esta ley vamos a cumplimentar su sentimiento. Queremos una universidad argentina y la tendremos. Habrá unidad de comando, porque así lo requiere la administración. No puede administrarse cada casa de estudios por sí, en forma desordenada. Habrá libertad plena en la docencia, porque necesitamos repoblar las universidades de verdaderos maestros, pero también habrá libertad de aprender, y por ello, por esta ley reformada, abrimos las puertas a todo hombre pobre o rico que quiera entrar por ellas a formarse, a educarse y a obtener su título profesional. Pero, todo ello queremos realizarlo dentro de la paz y el trabajo fecundo, a fin de que el estudiantado y el profesorado puedan especializarse.

Tendrá defectos, señor presidente, habremos olvidado muchas cosas; quizá no salga al pedir de muchos que creen que la reforma universitaria es tal cual la haría cada uno desde distintos enfoques. Pero la universidad argentina tendrá unidad de comando, libertad de enseñanza, libertad de aprender, amplitud en sus programas, unidad en el número de materias a enseñar en las distintas escuelas, materias básicas y clásicas. Tendrá igualdad en el número de cursos, igualdad de títulos a otorgarse en las distintas escuelas y facultades del país. Tendrá igualdad en el ingreso a las distintas universidades, la especialización en la cátedra y también, la especialización en el aprendizaje de su alumnado.

Eso era parte de lo que querían los estudiantes del 18, además de la asistencia libre por la cual tanta preocupación tuvo el estudiantado de Córdoba, y que conseguimos.

Esa asistencia libre se hace más que nunca indispensable, en el día de hoy, porque la universidad debe ser popular y el hombre que trabaja, necesita también, ir a la casa de estudios para obtener su título profesional, y es menester que lo haga con comodidad. La asistencia libre es muy discutida por algunos, pero si estuviéramos en Inglaterra donde los profesores tienen tres turnos para enseñar a sus alumnos, no habría para qué discutirlo, pues el que trabaja de noche puede ir a la mañana y el que lo hace a la mañana, puede ir a la tarde o a la noche. Pero es el caso que en nuestras universidades, el profesor enseña a una hora determinada y el que, por desgracia, tiene que trabajar para mantenerse él y los suyos y no

puede asistir a esa hora, pierde la clase. También, de esa manera perderemos muchos cerebros útiles que la patria necesita en estos momentos. Por eso, es que bregamos por la asistencia libre, en las clases teóricas, y la haremos obligatoria en las prácticas, ya que no es posible que los profesionales terminen sus estudios sin conocer la práctica de la profesión que deben ejercer a diario.

La docencia amplia y libre y la libertad de enseñar están bien especificadas en el artículo 74 de la ley. Habrá mayor libertad de enseñar que en ningún país y eso se debe a la forma como el excelentísimo señor presidente lo ha interpretado y quiere que se enseñe. Ese artículo 74 da libertad de enseñar, no sólo al profesor argentino que no sea profesor de la universidad, sino también al extranjero, a cualquier profesor que llegue al país y quiera enseñar para bien de la juventud.

Otro capítulo muy discutido, pero que va en la reforma de la nueva ley, es la extensión universitaria, vale decir que la universidad abre de par en par sus puertas para que el pueblo pueda llegar hasta ella y cuando el pueblo no pueda llegar a ella, es la universidad que con sus profesores y alumnos va a ir a enseñar en los sindicatos, en los centros obreros, culturales y donde a la universidad le soliciten su colaboración.

Con esto, señor presidente, vamos a poner en práctica una tentativa de ensayo que se realizó en Córdoba, allá por el año 1923, cuando el estudiantado tenía el gobierno de la casa de Trejo. La incultura era grande en la masa popular y entonces el estudiantado creyó oportuno distribuir a sus compañeros para que fueran a enseñar al obrero y sacarlo de su ignorancia. No solamente se le enseñaba a la clase trabajadora a leer y a escribir, sino que también se le inculcaba el amor a la patria, a la familia y a sus hermanos argentinos.

Creo que esto, hoy va a ser una realidad. Podrá desaparecer el analfabeto gracias a este tipo de extensión universitaria y sin que la Nación gaste un centavo, porque el estudiante podrá ir a enseñar donde se lo solicite.

La representación estudiantil, señor presidente, es otro punto muy discutido, pero se hace indispensable su solución. En Córdoba y en el resto de las universidades, tuvo un comienzo de mucha liberalidad. Pero el estudiantado no estaba educado para poder sostener esas prerrogativas que se le daban de sentarse en los consejos superiores para gobernar su propia casa. Y se llegó al abuso. Yo actué en esa época; y si odiosa fué la tiranía del profesorado, hoy, a través de los años, recuerdo que también se hizo odiosa la tiranía del estudiantado, porque con su inexperiencia y su violencia, imponía sus resoluciones en los consejos directivos, y

como no tenía nada que perder, el profesor cedía ante estas imposiciones por temor de ser despojado de su cátedra.

De ello surge que debemos dar representación al estudiantado para que se haga oír, para que exprese sus inquietudes, pero que no tenga el gobierno de la casa, porque le falta experiencia, que sólo puede adquirir después de muchos años de estudios.

Hoy, después de tanto tiempo transcurrido, me siento más sereno y por ello hablo de esta manera. El estudiantado debe ser escuchado, pero no puede manejar la casa ni pesar abusivamente con su voto en las resoluciones de los cuerpos directivos. La amplia libertad de enseñar y de aprender está contemplada.

Lo que se aspira al votar esta ley, es que se interprete como que estamos dando al país una cartilla, que traerá, si se lleva a la práctica con toda corrección y rectitud, como espero, por parte de los cuerpos universitarios, la paz definitiva en las casas de estudios del país.

No puedo olvidar que el señor presidente de la República, fiel intérprete del sentir de esta generación, es el que está guiando con su espíritu esta reforma universitaria, tan anhelada para la patria. (*¡Muy bien! Aplausos en las bancas.*)

Sr. Ramella. — Pido la palabra.

Voy a fundar brevemente mi opinión respecto a la ley universitaria y a las reformas introducidas por la comisión.

Estaba tentado, señor presidente, de hacer en la medida de mis fuerzas una incursión por la historia de la universidad para desvanecer muchos prejuicios y errores, pues he escuchado últimamente decir o se cree, por lo menos, que la cultura universitaria proviene de la Revolución Francesa, olvidándose de los luminosos ejemplos de las universidades medievales. Pero eso me llevaría a una extensión considerable en mi exposición, por lo que basta remitirnos a la concienzuda y concreta obra de Rómulo Amadeo, *La enseñanza universitaria*, donde se hace una síntesis excelente sobre el desarrollo de las universidades en el mundo.

Quiero, ahora, señor presidente, referirme a tres o cuatro aspectos fundamentales.

La universidad, sobre todas las cosas, es un problema de cultura. Por eso está bien el artículo 1º cuando dice que las universidades deben actuar con sentido social en la difusión de la cultura para el prestigio y engrandecimiento de la Nación.

Me atrevería a decir que la falla fundamental de nuestras universidades se encuentra en el hecho de que no se han sedimentado en la verdadera cultura humanista. En las grandes universidades inglesas no se ha despreciado este aspecto fundamental. No se ha querido destruir el eslabón que une a las generaciones humanas

con los sabios que las precedieron. Y por eso, en esas grandes universidades inglesas se enseña la cultura humanista, especialmente en las de Oxford y Cambridge, donde se forman hombres en el cabal sentido de la palabra. Allí se considera que si el conocimiento científico es necesario para la formación del hombre, que es un compuesto de alma y cuerpo, es también fundamental para la vida de los pueblos esa cultura humanista.

Esta angustia de la falta de cultura en el mundo, la anotaba con exquisita sagacidad el pensador español Ortega y Gasset antes de la hecatombe mundial reciente. «El carácter catatónico de la situación presente europea se debe a que el inglés medio, el francés medio, el alemán medio, son incultos; no poseen el sistema vital de ideas sobre el mundo y el hombre correspondientes al tiempo. Ese personaje medio es el nuevo bárbaro retrasado con respecto a su época, arcaico y primitivo, en comparación con la terrible actualidad y fecha de sus «problemas».

Sr. Herrera. — ¿Es del libro *Mision de la universidad*?

Sr. Ramella. — Sí, señor senador.

Esa insensibilidad de los médicos a que se refería el señor senador por Mendoza, la atribuyo en gran parte a la falta de una cultura en el sentido que la he explicado. Adquieren conocimientos, rudimentos de ciencias, pero no el concepto humano de la vida. Por eso, la tarea esencial de nuestras universidades ha de ser buscar los cimientos donde verdaderamente se deben encontrar, que es en la base misma de nuestra civilización grecolatina.

En la universidad, señor presidente, también hay un aspecto moral. No se puede dirigir la universidad, no se puede ser maestro si no se tiene un concepto acabado de los principios morales. No hay que perder de vista que la enseñanza es sobre todo eso: la plasmación de las almas juveniles; pero para ello se requiere en el maestro una verdadera vocación moral.

Uno de los fracasos de la llamada reforma universitaria, que habrá sido buena en sus ideales pero que fué pésima en su resultado, es el de que los hombres dirigentes, cuando llegaron a las posiciones públicas en la universidad, no supieron ser fieles a sus ideales ni supieron dar ejemplos morales a la juventud. Por eso la universidad — como después de todo es todo problema — es una cuestión de hombres.

La ley que estamos considerando indiscutiblemente significa un avance extraordinario con respecto a la vigente; pero su éxito dependerá, en gran medida, de los hombres que la apliquen y de que dentro de la universidad los profesores se preocupen realmente de formar las almas juveniles intelectual y moralmente.

Personalmente soy partidario de que se establezca una vinculación estrecha y constante entre profesores y alumnos; pero acepto la

solución que da la comisión en el sentido de no exigir la asistencia obligatoria a las clases teóricas, en razón de que en el estado actual de nuestra universidad no es posible obtener el ideal a que se refería el señor senador por Córdoba, de que las clases funcionen continuamente, de modo que nadie se prive de ellas en razón de su trabajo.

Esta vinculación entre profesores y alumnos era tan estrecha en las universidades primitivas, que en algunas se exigía a los profesores mantenerse célibes, a los efectos de que pudieran vivir en comunidad con sus alumnos.

Debo decir de paso, a pesar de que la comisión ha reformado en pequenísima parte el artículo 79 de la sanción de la Cámara de Diputados en este sentido, que el señor diputado Guardo, cuando se consideró ese artículo, expresó que el sentido del mismo no era el de establecer una asistencia rígida sino el de que el consejo de cada facultad podría determinar el mínimo de asistencia a las clases teóricas, en el caso de que no fueran obligatorias, asistan a las clases prácticas, pero que podía llegarse hasta el caso de eximir a los estudiantes, en razón de sus ocupaciones, de asistir a las clases teóricas; y el miembro informante de la comisión de la Cámara de Diputados, señor Obeid, a las palabras del señor diputado Guardo, agregó estas: «Ese es, señor presidente, el pensamiento de la mayoría de la comisión.»

Pero a pesar de eso, la comisión del Senado, para evitar cualquier malentendido, ha preferido reformar, como digo, en pequenísima parte ese artículo 79. Yo le atribuyo grandísima importancia a la vinculación del maestro con el alumno. Indiscutiblemente, que habrá casos excepcionales en que éste podrá formarse por sí solo, pero eso no es lo frecuente. He pasado por la Universidad en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, sin haber sentido la más mínima influencia rectora de los profesores de ella. Ibamos a las clases como se podía haber ido a una conferencia cualquiera y el profesor no tenía jamás la menor preocupación por el alumno que estaba delante suyo. Eso es todo menos enseñanza, y contraría las más elementales normas de una pedagogía bien entendida.

No podemos seguir con el sistema del profesor disertante, que tiene ante su vista, para decirlo así, un montón de alumnos, a los que considera como un simple número sentado en un banco, no existiendo entre profesor y alumno ninguna vinculación espiritual. Para seguir así, más vale terminar con las clases teóricas, con la enseñanza profesional, y reducirla simplemente a las clases prácticas.

Desgraciadamente, en la universidad reformista en que me tocó estudiar, lo único que vi fué un afán electoralista desmedido de parte de los profesores, que trataban de congraciarse exclusivamente con los alumnos también electo-

ralistas y politiqueros, sin pensar ni detener su mirada en los estudiantes que realmente deseaban aprender. Este es un asunto tan importante que una comisión que estudió la situación de la Universidad de Londres, en 1910, presidida por lord Haldane, atribuyó como uno de los bienes de la universidad el que existiera una vinculación efectiva entre los profesores y alumnos. Por eso es de desear que las autoridades que encarrilen esta nueva estructuración legal, procuren por todos los medios facilitar a los alumnos la asistencia a las clases, multiplicando los cursos.

No creo que sea tampoco absolutamente científico ni pedagógico que un solo profesor enseñe cada materia. Primero, porque no es posible suponer el monopolio de la ciencia durante muchos años en manos de una sola persona y, después, por esa circunstancia apuntada de que es necesario multiplicar los cursos para facilitar el acceso de los alumnos a las clases.

La universidad debe ser, señor presidente, también un centro de estudios. Aunque parezca una perogrullada decirlo, la universidad debe ser para estudiar. Y hay que decirlo así porque durante mucho tiempo la universidad argentina no fué un centro de estudios, sino un centro de politiquería y de agitación.

Para que exista verdadera ciencia es necesario que el maestro tenga una absoluta libertad de expresión y en la ley se deja a salvo esa libertad. Existe una regulación administrativa del Poder Ejecutivo, pero en cuanto a la actividad docente, como no puede ser de otra manera, —y se señaló especialmente en el informe de la Honorable Cámara de Diputados— la libertad científica es absoluta.

En este sentido, la universidad argentina ha dado, desgraciadamente, ejemplo de no cultivar la verdadera ciencia, porque le ha faltado a la mayoría de sus profesores la virtud esencial de la educación, que es la humildad. Hemos visto hombres hinchados de soberbia que creaban una ciencia particular y lo que sucedió en algunos cursos de la Facultad de Medicina es significativo al respecto. Es muy común oír a los alumnos de dicha facultad, que determinados profesores enseñan la materia o algunos puntos de la misma, a su gusto, y aconsejan perentoriamente a los estudiantes que adopten como verdad indiscutible lo que les enseñan, sin admitir de ninguna manera las enseñanzas de otros profesores. Eso no es ciencia; revela en el maestro una falta de concepto de la humildad, verdaderamente alarmante para la educación de nuestros jóvenes.

En la Facultad de Derecho hemos visto —lo he sentido en carne propia— profesores absolutamente impermeables a los nuevos conceptos jurídicos, que mantenían inalterables sus programas durante diez y veinte años, de manera

que la misma composición tipográfica sirve para hacer los programas durante muchos años. Ellos no sienten la necesidad de auscultar las nuevas corrientes jurídicas y políticas que desbordan el mundo; ellos han creado un programa, una doctrina, un método y no lo abandonan jamás.

Otro de los grandes defectos de nuestra universidad, —sobre lo cual insisto a pesar de que ya sobre ese punto se ha referido con gran ilustración el señor senador por Catamarca, doctor Herrera— es la absoluta desvinculación de la universidad con el pueblo. Un intelectualismo puro, para mí, es más pernicioso que el analfabetismo: me refiero al intelectual que se rodea y se encierra en sí mismo y que no siente las palpitaciones ni las angustias del pueblo.

Por eso para mí tiene ese significado trascendente otra palabra del artículo 1º de la ley. A veces es necesario ahondar y auscultar el sentido de las palabras, para que los textos legales tengan verdadera vida. Y es cuando dice «que las universidades tienen a su cargo la formación de la juventud para la vida». Hay que ahondar en esta palabra y entonces veremos la justeza y la sabiduría de la misma: hay que formar a la juventud para la vida; la ciencia debe estar al servicio de la vida humana. No podemos crear conceptos y ciencia para encastillarnos dentro de nosotros mismos y no sentir el dolor ajeno, la palpitación del alma que sufre. Y ese ha sido, después de todo, el pecado de los universitarios argentinos durante los últimos tiempos, y ello explica la incompreensión que tuvieron ante el movimiento revolucionario. No fué tanto culpa de ellos como de las generaciones que los habían precedido, porque todo el intelectualismo argentino había sido un intelectualismo frío, desprovisto de vida, y ajeno, como digo, a las necesidades reales del pueblo argentino.

Ojalá que los que apliquen esta ley, los profesores que enseñen en las distintas casas de estudio, tengan esa verdadera inquietud y tomen este recuerdo de lo que ocurrió estos últimos años en nuestra patria, para que no se desvinculen del pueblo, para que no olviden sus sufrimientos y para que sientan sus angustias, para mejorar su condición de vida por medio de la ciencia y por medio del arte.

Como se ha dicho muy bien, el destinatario último de la universidad es el alumno, pero todo lo que tienda a halagar las pasiones de los alumnos es un medio de corrupción. Ver en el alumno un ser humano, un alma que crece, ésa me parece que es la función del educador, y no ver en el alumno un instrumento para encaramarse en las posiciones oficiales de la universidad. Por eso tiene un gran sentido moralizador y reparador la supresión de la politiquería estudiantil en las universidades. Se quiere que el

alumno sea lo que debe ser: un hombre que está creciendo en sabiduría, a los efectos de que luego substituya a las generaciones que están caducando.

Por eso soy contrario a toda limitación puramente reglamentaria en lo que se refiere a la admisión de los alumnos a la universidad. Yo creo que la única restricción posible, natural y justa es la seriedad de los estudios. Ultimamente tuve ocasión de presenciar exámenes de derecho constitucional en la Facultad de Buenos Aires, y realmente sentía una profunda lástima; lástima por los profesores que estaban examinando, lástima por los alumnos que no sabían casi nada, a pesar de lo cual eran aprobados; y lástima, también, por la patria, que luego tendrá tales conductores.

Si tomamos el examen como un medio de halagar a los alumnos y de no sufrir incomodidades, no tendremos jamás una universidad verdaderamente digna.

Me referiré ahora a otro problema: el acceso de los obreros a la universidad. Ya se ocupó también de esta cuestión Ortega y Gasset, quien decía que él era partidario de que el obrero tuviera acceso a la universidad, pero que ello era más una cuestión de Estado que una cuestión de la universidad. Y ésa es la solución que da la ley que consideramos. ¿Por qué? Porque es el Estado el que suministra los medios económicos para que los obreros puedan tener acceso a la misma. ¿Y por qué los obreros han de tener acceso a la universidad? Porque estamos viendo que los obreros irrumpen en los cuadros directivos de todos los gobiernos del mundo. Y si con toda justicia ellos también participan del gobierno, también tienen derecho a adquirir la capacidad suficiente para dirigir los destinos del país.

Se habla excesivamente de la democracia. En una escuela de San Juan, en una oportunidad, hice redactar a los alumnos una composición que versara sobre la democracia. Mis alumnos, a pesar de que en un futuro cercano estarían en vísperas de ser electores, no tenían la más mínima noción de lo que era la democracia.

Dos principios informan la democracia: fundamentalmente la libertad y la igualdad. La libertad es la que han pregonado muchos, pero olvidándose absolutamente de la igualdad; y es en virtud de este principio de la igualdad que los obreros tienen derecho a ingresar a la universidad, si es que tienen la capacidad suficiente para ello, es decir, que no debe hacerse una universidad de castas, como lo dijo el señor senador por Mendoza; no deben hacerse círculos cerrados que después dan lugar a las grandes convulsiones sociales.

Este proyecto, en mi concepto, contiene una positiva mejora con relación a la ley en vigencia y con respecto al caos que en materia legal actualmente reina en el orden universitario,

por cuanto unas se regían por un principio y otras por otros. Esta ley tiene la virtud indiscutible de establecer un orden para las distintas universidades del país, y en ese sentido ha de rendir frutos óptimos. Esperemos, señor presidente, que en la aplicación de esta ley universitaria se proceda con la más absoluta serenidad, porque ella se requiere en grado sumo para dirigir a jóvenes que están en el comienzo de la vida y que, como tienen sangre bulliciosa, a veces no ven dónde está el bien y dónde está la verdad. Para que los vean claramente, los que dirigen los destinos de la universidad deben proceder con una absoluta serenidad, porque si los alumnos no aprecian en ellos esta virtud, no podrá exigírseles luego que la tengan. Hago votos, señor presidente, por que esta ley que considero básica en el ordenamiento jurídico del país sea fecunda en resultados y que, a su sombra, las nuevas generaciones argentinas tengan la fortuna de educarse y de formarse mejor de lo que nos hemos educado y formado nosotros. (*¡Muy bien! en las bancas.*)

Sr. Antille. — Pido la palabra.

Profesor de la Universidad del Litoral desde hace más de 25 años, deseo pronunciar algunas palabras para apoyar el informe de la comisión, puesto que mi silencio podría ser interpretado como un voto negativo, aunque silencioso, de la reforma proyectada. Estoy de acuerdo con esta ley y las modificaciones que se tratarán en particular; y estoy de acuerdo con ellas porque, en realidad, lo estoy en lo esencial con el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados, donde se ha estudiado con conocimiento y exposición a fondo de la materia, este proyecto que es tan importante que puede llegar a ser una de las leyes capitales que el Congreso dicte en este año.

He leído atentamente todas las exposiciones de los diputados que intervinieron en el debate, he seguido la discusión tratando de explicarme cuáles eran las divergencias entre los oradores y cuáles eran las finalidades que se perseguían por la ley.

He entendido, señor presidente, que la ley Avellaneda, a pesar de ser tan concisa, a pesar de ser estrictamente enderezada a fijar un concepto fundamental de la universidad, cual era la autonomía de la misma con respecto al gobierno de la Nación, había cumplido su misión en una forma que no ha podido nunca ser objetada, ya que el cumplimiento de aquella ley se realizaba en su aplicación bajo el otorgamiento de los estatutos que las mismas universidades creadas y existentes en el país, se daban, de acuerdo con la autonomía reconocida por la ley que acabo de mencionar.

Pero han sido tan grandes las deficiencias notadas en el funcionamiento de estas instituciones de cultura y de enseñanza en el país, han sido tan notables las fallas que se han observado,

que era indispensable fijar las irregularidades y transformarlas por una norma legislativa, en caminos claros que impidieran su repetición en adelante, por lo que estuve de acuerdo en el pensamiento con la necesidad de modificar aquella antigua ley. Creo que, en realidad, esta ley, la que estamos discutiendo, tiene antecedentes en la aplicación de la anterior en todas las universidades del país, bajo los estatutos dictados, los cuales deseaban obtener remedios a los males observados. No sé si se conseguirá el desiderátum anhelado. No sé si las modificaciones que vamos a votar darán los resultados que los diputados iniciadores de este proyecto esperaban alcanzar. En realidad, todavía flota en el ambiente y resulta de las palabras pronunciadas en este cuerpo, y sobre todo del debate en la Cámara de Diputados, algo que pone en duda, si se conseguirá la normalización y los fines totales que se deben esperar del funcionamiento legal de la universidad. Por la práctica que como estudiante alcancé, y que como profesor observé, no creo que algunas de las reformas que en este mismo cuerpo hoy se hacen con respecto al proyecto en revisión, pueda dar beneficios en el sentido que yo desearía para las facultades y para los estudiantes universitarios.

Cursé los años universitarios de acuerdo con normas que exigían la presencia obligada de los alumnos para oír las clases de los profesores. Recuerdo que en esa época pude comprobar que la gran ventaja que se obtenía con la asistencia obligatoria, no se obtuvo después en la época que yo era profesor con la asistencia libre. El despego que resulta de esa práctica del alumno y del profesor no se podrá cubrir jamás. Precisamente, la importancia del funcionamiento de algunas universidades extranjeras radica en lo que ya se ha dicho en esta Cámara: en el acercamiento íntimo del alumno y del profesor para lo que llega a exigirse en algunos institutos docentes, que el profesor está constantemente cumpliendo el deber de protección y conducción del espíritu del alumno, y esté enseñándole con la palabra, con el ejemplo y con la cátedra todo lo que el alumno necesita para lograr el fundamento esencial de toda universidad: que se haga un hombre apto, que se beneficie para su beneficio, para la familia y para la patria donde la universidad funciona.

Eso no se logra cuando no hay asistencia obligatoria, porque no hay acercamiento íntimo entre el profesor y el alumno; no se alcanza porque cuando el alumno, en la época de juventud, en que si no existe una norma coercitiva, personalmente no se siente llevado a cumplir lo que es un deber y tal vez una tarea, no comparece, voluntariamente no ya diría a recibir la enseñanza, sino la experiencia, el consejo moral y esa dirección tan personal y útil de los grandes maestros.

En la época en que actué como profesor, di-

facilmente se consiguió, después de la reforma del año 18, que los alumnos estimularan al profesor con su asistencia. Los profesores no se sentían entusiasmados para la enseñanza. Los exámenes, que los alumnos consiguieron que fueran duplicados y después hasta hechos por tres veces durante el año, parece que hubiera sido la única finalidad que tenían las universidades del país y perseguían sus alumnos.

Querían ser los alumnos no titulares de alguna profesión y nada más. No aprendían para saber, que eso debiera ser la aspiración de todo buen estudiante. Leían para rendir examen y para pasar rápidamente el peligro de la mesa examinadora y terminar su carrera. Con eso no se podía obtener la finalidad que debe ser esencial de todo instituto de docencia: preparar al alumno para en la lucha por la vida, para el bien del país.

¿Y qué ha ocurrido? Que los profesores, a su vez, sin el estímulo y sin la dignidad necesaria, sólo vieron en la docencia un medio de vida con facilidad para obtener ganancias fáciles para seguir viviendo. De aquí es que nació este mal: nació el hecho de que viéramos conflictos de carácter electoralista, pujas por llegar al profesorado, indisciplina y hasta sobornos, como se ha expuesto como mal de muchas facultades, sobre todo de las de esta Capital.

Esta ley trata de modificar esa situación universitaria. No sé si lo va a lograr, repito. Pero esta falta de exigencia de la presencia obligada del alumno en la casa, puede ser un error que quizá tengamos que corregir más tarde, modificando la ley.

Algunas reformas ha tenido el proyecto en discusión, porque eran necesarias.

En el artículo 115 que venía en el proyecto de la Cámara de Diputados, se consignaba el principio de que los profesores que actualmente ejercen el cargo, quedaban confirmados después que la ley entrara en vigencia. Era un error fundamental, porque los cargos de profesor deben ser siempre otorgados por el presidente de la República, de acuerdo con la facultad que le da a este poder el artículo 86 de la Constitución nacional. No se puede, por una ley, otorgar una función en ninguna parte de la administración, y la docencia es parte de la administración, la universitaria. De aquí que el Senado se haya visto obligado a observar y a no aprobar este artículo, según el informe que se nos ha dado.

También se ha discutido, con razón, la aceptación de la compatibilidad, o sea fijar el principio de la incompatibilidad del cargo de rector con los mandatos populares. Nos pareció siempre, cuando discutíamos esta ley, en esta parte, que no debía aceptarse esta compatibilidad. El rector ejerce una altísima función. Es designado directamente como representante del Poder Ejecuti-

vo en las universidades, para el cargo de dirigir a éstas; y el desempeño de estas tareas le absorbe todo su tiempo.

Si queremos, por otra parte, alejar de la casa universitaria la política, en cualquier aspecto que sea, no se puede consentir que el rector ejerza un mandato en el Congreso. De aquí que ello deba ser reformado por el voto que ha de dar el Senado.

En la elección de rector se ha aceptado que el Ejecutivo intervenga directamente sin intervención del Consejo Universitario, porque era conveniente que la facultad fuera dirigida siquiera indirectamente por el Poder Ejecutivo, quien al nombrar al rector asumía la plena responsabilidad de la dirección de estas casas de estudio.

Anteriormente, un Consejo Universitario hacía la elección de acuerdo con una tradición muy antigua, de que los pares, los iguales, elegían al presidente del consejo; los profesores en consejo universitario elegían al rector y lo proponían al Poder Ejecutivo. Aquí se ha dicho con toda claridad que es el Poder Ejecutivo, bajo su responsabilidad, quien hace las designaciones. Los decanos son elegidos según el proyecto, a propuesta en terna hecha por el rector, a los consejos directivos de las facultades. Se quita, así, al consejo directivo lo que anteriormente tenía como una plena autorización por sus estatutos, de elegir a sus propios decanos.

Se hace un enlace o relación exacta entre las mismas responsabilidades del Poder Ejecutivo con respecto al rector y la responsabilidad de este poder con respecto también a los decanos que administran y dirigen las facultades que componen una universidad. Se puede pasar por alto esta parte, porque el Senado no pretende, a esta altura del período parlamentario, introducir reformas que puedan hacer peligrar el régimen de esta ley, por los largos debates que se originaran en la Cámara de Diputados y le impidiera entrar en función. Por mi parte voy a aceptar esta modificación para que no sea motivo luego de grandes discusiones. Lo que debo observar es que con respecto a la ley Avellaneda se ha llegado de los escuetos artículos que la componen a un proyecto de ley que se toma de experiencias anteriores y de normas fijadas anteriormente, también, en los estatutos de las universidades.

Se ha creado algo nuevo, que es el Fondo Universitario; el régimen financiero económico universitario, tratando de obtener lo que era casi una aspiración unánime, en nuestro país, para la universidad: que se rijan por sí mismas, con autonomía económica. Todas las universidades argentinas han vivido y se han nutrido de los subsidios dados por ley por el Congreso, que pocas veces han bastado para llenar todas sus necesidades.

Carecemos de la generosidad que se demuestra en Estados Unidos con respecto a estos institutos. No hay aquí millonarios que dejen en sus testamentos fortunas para crear fundaciones de carácter universitario.

En nuestro país nace un instituto de enseñanza superior a base de los subsidios o de leyes especiales y con fondos del Estado. Por eso es que se tienda a darle una cimentación especial a estos institutos creándose un impuesto del 2 % sobre todo lo que deben abonar los empleadores a los empleados, excluidos los del servicio doméstico. Este es un paso adelante para dar una autonomía específica, firme y segura a los institutos de enseñanza. Creo que avanzamos en el sentido del progreso de la universidad en el aspecto de la docencia porque también fijamos las funciones del profesor en la casa.

Creemos la carrera del profesor, le damos una retribución de acuerdo con las exigencias de la época que le permitan trabajar con toda independencia económica; fijamos las atribuciones, los deberes y la retribución que debe percibir; le creamos la obligación de enseñar, en algún caso por todo el tiempo, con una retribución superior, y en otros casos para el tiempo indispensable que debe dedicar a la cátedra, para no ser separado de la enseñanza.

Y es por todas estas razones que he expresado, que voy a dar mi voto afirmativo a la ley.

Las universidades dependían del Poder Ejecutivo; éste cambiaba, a veces, con cierta facilidad de ministro de Instrucción Pública; ellos, también, modificaban sus estatutos. Con esto le fijamos de una manera definitiva una orientación a la enseñanza superior.

No creo, señor presidente, que con esta sanción hemos agotado el tema; esta ley podrá ser susceptible, todavía, de algunas otras reformas, pero lo substancial está fijado en los preceptos que vamos a votar.

De aquí que yo declaro que, con la experiencia de profesor, con el recuerdo de alumno que cursó los años antes de la reforma de 1919, y con lo que he aprendido en la vida, voto con toda confianza, en la seguridad de que no me equivoco, esta ley que viene de la Cámara de Diputados, con las reformas que acaba de expresar y fundamentar el señor miembro informante de la comisión. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! en las bancas.*)

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

He escuchado con el máximo de atención posible las brillantes exposiciones de mis colegas. Sería inoportuno, a esta altura del debate, entrar en disquisiciones de carácter filosófico o histórico, pues ya lo hicieron ellos en forma medular; pero como universitario no puedo votar esta ley sin antes dar mi opinión al respecto.

Apoyaré, en sus lineamientos generales, las reformas aconsejadas por la comisión del Honorable Senado, aunque al hacerlo tenga que aceptar en algunos casos transacciones temporarias, porque las circunstancias así lo exigen.

Esta ley, creadora de una universidad revolucionaria, es la segunda parte de la reforma universitaria, cuyo primer grito fué dado por los estudiantes de la universidad de Trejo, en la ciudad de Córdoba. Esta ley revolucionaria es la continuación de aquella que se ha dado en llamar reforma universitaria, que fué de carácter estrictamente sentimental e idealista y que reconoció como antecedente inmediato, en el orden político, el triunfo del Partido Radical con Hipólito Yrigoyen, para ocupar la presidencia de la República, la primera vez en que el pueblo de la Nación concurrió a las urnas para depositar su voto a conciencia y con libertad.

Esa reforma universitaria del año 1918 tuvo como antecedente social inmediato un fuerte sacudón a la oligarquía, o a lo que se llamó en aquella época, la aristocracia rural, que llegó a encaramarse en el mismo claustro universitario para cerrar las puertas a los que aspiraban a llegar a ella, reservándolo para unos cuantos que la detentaban en su beneficio particular.

Y bien, señor presidente. Corrió el tiempo. Tuvo aquella reforma universitaria que soportar los embates de una lucha cruenta. Resistió, digamos así, en lineamientos generales, hasta el año 1930, cuando un cuartelazo derribó del gobierno al presidente constitucional para instalar un gobierno defacto, época en que se inicia una era de vergüenza, de fraude, de violencia, y en la que el peculado era norma común en la administración pública. Y así llegamos hasta 1943, al 4 de junio, en que salió el ejército de nuevo ante esta situación de vergüenza, para hacer respetar la voluntad popular.

El 4 de junio se inicia una nueva era; se inicia la era revolucionaria. Conseguimos, con el advenimiento de nuestro gobierno actual, una de las conquistas más preciadas del pueblo argentino, que servirá de ejemplo y de norma para la América. Conseguimos establecer, desde el punto de vista político, nuevamente, el imperio de la democracia, aquella democracia que definiera un célebre pensador como la esperanza de ser —definición que comparto—, esperanza de ser a la cual todos los gobiernos están obligados a prestarle la oportunidad a todos y cada uno de sus habitantes. Y así fué, señor presidente; en comicios ejemplares se pronunció el pueblo de la Nación Argentina, con los resultados por todos conocidos.

Teníamos así la liberación política democrática, pero no era suficiente. El nuevo gobierno constitucional instalado, ha conseguido despojarse del lastre económico en su dependencia del

extranjero y así hemos llegado a proclamar la independencia económica de la República Argentina. Pero era necesario ir más allá. Fuimos a obtener la independencia social, la independencia de las clases necesitadas, la independencia de todos aquellos que estaban sumergidos en el abismo de la necesidad para levantarlos, sacarlos a la superficie y permitirles vivir honradamente, como seres humanos.

Pero aun nos faltaba hacernos presentes en otro lugar. Hacía falta, en esta nueva era, llegar a la universidad para proclamar también allí la misma independencia. Era menester ir allí, no para mantener una universidad fría, como lo dijo el señor senador Ramella. Hacía falta ir a la universidad para que todos los jóvenes, esperanza de la patria, que puedan llegar a sus aulas, encuentren al maestro que plasme el hombre profundamente humanista y de existencia realmente consolidada desde el punto de vista ético. Y esa universidad democrática que pregonamos, es esa universidad acorde con la definición que acabo de dar, como la esperanza de ser, y para que ella sea la esperanza de ser, es menester que demos la oportunidad a todos los jóvenes argentinos vengan de donde vinieran, sean hijos de capitalistas, de estudiosos, de rentistas, de jornaleros, a todos les debemos dar la oportunidad de ser hombres perfectamente humanistas y de textura realmente ética.

Y bien, señor presidente, estamos en esta etapa. El Honorable Senado de la Nación ha estudiado con serenidad esta ley, ha considerado y pesado sus artículos y le ha introducido algunas reformas. En primer lugar, en lo relacionado con la representación estudiantil. Pienso como universitario que no se puede privar al estudiante que concurra al consejo de la respectiva facultad y que debe permitírsele la libre elección de sus consejeros, para que pueda expresar su voluntad, que es el reflejo de la voluntad y de las necesidades de todos sus compañeros. No temo al estudiante rebelde; prefiero al estudiante con inquietudes y le temo al estudiante chato y adormecido. Es por ello que dije hace un momento que no queremos una universidad fría. Por eso, personalmente, soy partidario de la representación estudiantil. Pero por razones superiores del momento y con el fin de que pueda dictarse esta ley, acepto que el representante estudiantil sea sorteado entre los diez mejores estudiantes.

Asistencia libre a las clases teóricas. Tengo convicciones profundas en este sentido. Creo que la asistencia debe ser libre a las clases teóricas, porque de no ser así la universidad dejaría de serlo. Creo que debe ser libre esa asistencia para evitar que los jóvenes necesitados, que deben trabajar para mantener su familia, costear sus estudios, se encuentren con una valla cuando no puedan asistir a las clases teóricas.

Creo que la asistencia debe ser libre porque el profesor capacitado siempre tiene su aula llena de estudiantes que ven en él el maestro que honra a la cátedra. Por eso digo que tengo profundas convicciones en esta materia y soy un fervoroso defensor de la enseñanza libre, que he aprendido en la universidad reformista, en la que tuve, afortunadamente, oportunidad de estudiar.

En cuanto a los exámenes de ingreso, que figuran en la ley con alguna modificación, lo acepto, también, como una redundancia, porque me parece innecesario establecerlo, ya que la ley confiere toda clase de atribuciones a la universidad; pero, ya que está, no me opongo a que se sancione en esa forma.

No necesito explayarme sobre la necesidad de los planes uniformes de la universidad argentina. Ya mis distinguidos colegas lo hicieron con toda claridad.

Tampoco necesito insistir en los sólidos argumentos del señor senador por Santa Fe, para apoyar las modificaciones a los artículos 115 y 116 de esta ley, pero creo, señor presidente, que no se ha considerado una situación, y es la de los departamentos. He de aceptar, como es lógico y como corresponde, las decisiones del cuerpo en esta materia, pero pienso que la creación de departamentos tiene un sentido burocrático. Con la cátedra y los institutos de investigación tendremos la universidad que queremos. Los departamentos, aun con la concepción de los norteamericanos, creo que no son ni siquiera necesarios, por el momento, en nuestra universidad. Ningún daño harán —nada más que crear una frondosa burocracia—, y es por esa razón que no hago ninguna objeción.

Creo, sí, señor presidente, que con las modificaciones que se introducen y el análisis que podría continuar haciendo del proyecto, pero que no hago por no abusar de la tolerancia de mis distinguidos colegas, obtendremos una buena ley que iremos modificando sobre la marcha, si así fuera menester.

Sr. Durand. — Pido la palabra.

Quiero decir, señor presidente, algunas palabras sobre lo que pasaba, como acaba de decir mi distinguido colega el señor senador por Catamarca, doctor Saadi, en la década vergonzosa. Me voy a referir a algo relacionado con el orden económico: cómo era entonces y cómo es ahora.

Efectivamente, estamos hablando de la universidad y por eso quiero que la juventud universitaria conozca el desorden que antes reinaba en el orden económico, producido por hombres salidos de esa universidad que estamos reformando, y en breves palabras, para no entretener mucho a la Honorable Cámara.

La desvergüenza de la oligarquía llegó a tales extremos, señor presidente, que con su mago de las finanzas, descubrió un buen día

que los bancos locales estaban en falencia, que el pueblo argentino no podría retirar sus depósitos de caja de ahorro. Entonces inventó el mago, el Instituto Movilizador.

Sr. Antille. — ¿Quién es el mago?

Sr. Durand. — Federico Pinedo, señor senador.

Inventó el Instituto Movilizador, desdoblando la moneda argentina, que se convertía, entonces, a razón de 44 centavos oro por peso, reduciendo esa suma a 20,59 centavos. Eso le produjo al mago 702.000.000 de pesos, y con ellos fundó el Instituto Movilizador. Y en vez de emplear ese dinero en obras públicas para activar en forma permanente la riqueza de nuestro país, como se hace ahora, los distribuyó a sus amigos, tranquilamente. Yo tengo la lista...

Sr. Gómez del Junco. — ¿Y a la universidad le dió algo?

Sr. Durand. — A ciertos diarios y a algunos amigos políticos. Cuando el mago de las finanzas quiera saber de esa distribución, le aconsejo que me lo pregunte.

En cuanto al Banco Central, fundado por ese mago, gran discípulo de Niemeyer, abría créditos, como bien dijo aquí nuestro actual director de las finanzas, señor Miranda, en la proporción de 100 por 1. Es decir, que si una firma de plaza declaraba tener un capital de 10.000.000 le abría un crédito por 1.000.000.000 de pesos. Y me refiero a las grandes firmas: Bemberg, Bunge y Born, Dreyfus, etcétera, que explotaban el lucro intermediario internacional con nuestros productos sin ningún beneficio para el país.

¿Cómo es, ahora, señor presidente, con el nuevo sistema bancario? Este nos ha permitido adquirir los ferrocarriles, los teléfonos, las flotas mercante y aérea; construcción del gran gasoducto y poseer la industria del gas. Hemos podido, también, formar el Instituto Mixto de Reaseguros, que él solo dará al país una utilidad de más de 100.000.000 de pesos por año. Y en fin, señor presidente, nos ha permitido incrementar todas nuestras industrias; y así, podemos decir ahora, que el país entra en una franca y decidida era de prosperidad. Nuestro país es el único en el mundo donde no hay cesantías y donde la vida es relativamente cómoda y barata; hace poco tiempo, como saben los señores senadores he realizado una visita a doce o trece repúblicas americanas, y puedo decir que en esos países reina escasez y confusión económica.

Y aun hay más todavía, señor presidente; ese mago de las finanzas, el año 1935, distribuyó a sus amigos 86.000.000 de pesos con asientos de libros en el Banco de la Nación Argentina. Tengo a este respecto la lista íntegra de todos los beneficiarios de esa enorme suma. El Banco de la Nación nunca ha castigado en ganancias y pérdidas una cantidad superior de dos a cuatro millones de pesos por año.

Sería muy largo enumerar, señor presidente, las dilapidaciones enormes efectuadas en esa época sin ningún beneficio para el país. Pero eso sí, ese señor a quien llamaban el mago de las finanzas, se permitió declarar que él cobraba cheques hasta de 10.000 libras esterlinas por servicios prestados a los ferrocarriles extranjeros, que hoy son argentinos. También ha cobrado una suma de dinero por haber servido a empresas de puertos entregados al extranjero por la oligarquía.

Indudablemente, señor presidente, tienen que añorar esas ganancias. Originariamente habían iniciado la época, «me refiero a la oligarquía de antaño», de las dilapidaciones con la creación del Banco Nacional, posteriormente en liquidación: si señor presidente, lo distribuyeron entre sus amigos, en la misma forma que el año 1935 distribuyeron esos 86.000.000 a que me he referido, como también con la distribución de las utilidades de la revaluación del oro por medio del Instituto Movilizador.

Termino estas palabras, señor presidente, reservándome para otra oportunidad continuar con el tema, ya que la hora es avanzada y el Honorable Senado debe terminar con la consideración de este proyecto.

Sr. Presidente (Bavio). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Bavio). — En consideración en particular.

—Sin observación se lee y aprueba el artículo 1º.

Sr. Gómez del Junco. — Pido la palabra, para hacer indicación de que artículo que no se observe, se dé por aprobado.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Bavio). — Habiendo asentimiento, así se procederá.

—Se lee el artículo 2º. Al llegarse al inciso 7º, dice el

Sr. Antille. — Pido la palabra.

Deseo que el señor miembro informante me explique el alcance de las palabras «educación informativa y formativa», que figuran en el inciso 7º de este artículo.

Yo entiendo que la educación tiene que ser formativa, que eso es una condición de la universidad, pero al decir «educación informativa» creo que debe entenderse que solamente es el resultado de los informes que pueden obtener los alumnos.

Sr. Soler. — En ese sentido, señor senador por Santa Fe, educación informativa se refiere a la información que pueda traer el profesor en sus clases, y formativa la que atañe a la formación del carácter del estudiante, y del verdadero investigador. Esa es la fase formativa y humanista a que han hecho referencia los senadores Ramella y Saadi.

Sr. Gómez del Junco. — Pido la palabra.

Voy a tratar de aclarar un poco más. La parte informativa en la cátedra...

Sr. Antille. — No, en la educación.

Sr. Gómez del Junco. — Precisamente, la cátedra va a informar de todas las novedades científicas habidas, y se va a educar al alumno a fin de que se oriente para buscar informaciones, no sólo en la parte básica que da la cátedra, sino en todo lo necesario para profundizar la materia.

Sr. Antille. — Muy bien, muchas gracias por la aclaración, señor senador.

—Sin observación, se aprueban los artículos 2º y 3º.

—Se lee el artículo 4º.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

Quería indicar que hay una coma de más después de la palabra «indirectamente», la que oscurece el sentido del artículo.

Sr. Presidente (Bavio). — El señor senador hace indicación para que se suprima la coma después de la palabra «indirectamente». ¿La comisión acepta?

Sr. Soler. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Bavio). — Queda suprimida la coma después de la palabra «indirectamente».

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

Con el objeto de un mayor ordenamiento y de graduar las penas en la forma que corresponda, sería del caso alterar el orden. En lugar de decir: «exoneración, expulsión, cesantía o suspensión según el caso» que digamos: «suspensión, cesantía, expulsión o exoneración», dejando la pena mayor para el final.

Sr. Presidente (Bavio). — ¿La comisión acepta?

Sr. Amelotti. — Haría una aclaración más: agregaría a la observación hecha por el señor senador Saadi, que donde dice: «suspensión» también se agregara la palabra «temporaria».

Sr. Saadi. — Al decir suspensión queda sobrentendido que es temporaria.

Sr. Amelotti. — Era a los efectos de darle mayor claridad.

Sr. Soler. — Pido la palabra.

Como miembro informante debo decir que se tuvo en cuenta cuando se trató este artículo, esta situación de cambiar el orden de las palabras. Pero como en realidad, no modificaba

el concepto ni el espíritu del artículo, no nos preocupamos en hacerlo en forma más gramatical. Si el señor senador por Catamarca cree que debe hacerse así, la comisión no tiene inconveniente en aceptarlo.

Sr. Presidente (Bavio). — Se va a votar el artículo con la modificación propuesta por el señor senador por Catamarca.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 5º.

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

Si no hubiera inconveniente por parte de la comisión, propondría una modificación al inciso c), que creo no está redactado con propiedad. En él se dice: «Los establecimientos privados, municipales, provinciales o nacionales, que fueren transferidos a la jurisdicción...». No se puede transferir a la jurisdicción, sino al ente universitario. Si no hubiera inconveniente, propondría que se dijera: «que fueren transferidos a la universidad». En esta forma quedaría redactado el inciso con más propiedad.

Sr. Soler. — La comisión ha entendido que debía transferirse a la universidad.

Sr. Saadi. — Pero no a la jurisdicción, que es una cosa distinta.

Sr. Soler. — Desde el momento que son transferidos, pertenecen a la universidad.

Sr. Antille. — En realidad, el ente que se transfiere al instituto puede ser universitario ya, pero bajo la dirección de la provincia y se pasa a la jurisdicción de la Nación, que es lo que quiere decir el artículo. Por eso, entonces, está bien.

Sr. Saadi. — No, señor senador.

Sr. Ramella. — Adhiero al concepto expresado por el señor senador por Santa Fe, porque al decir «jurisdicción universitaria», se entiende que un establecimiento privado, municipal o provincial, sin pertenecer estrictamente a la universidad, puede estar bajo la jurisdicción universitaria.

Sr. Saadi. — Sí, señor senador; pero no es transferible. Repare en la palabra «transferidos».

Sr. Ramella. — Entonces cambiemos la palabra «transferidos».

Sr. Saadi. — Pero demos el sentido que debe tener, pues en esta forma creo que hay impropiedad.

Sr. Antille. — Podríamos poner: «...que fueren puestos bajo la jurisdicción universitaria»...

Sr. Saadi. — Acepto, señor senador.

Sr. Presidente (Bavio). — Se va a leer como quedaría redactado el artículo con la modificación propuesta y aceptada por la comisión.

Sr. Secretario (Reales). — (*Leyendo*): «Inciso c) Los establecimientos privados, municipales, provinciales o nacionales, que fueren puestos bajo la jurisdicción universitaria por la autoridad respectiva.»

Sr. Antille. — Exactamente; así quedaría redactado el artículo.

Sr. Presidente (Bavio). — Se va a votar el inciso c) del artículo 5º, con la modificación propuesta.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se leen y se aprueban, sin modificación, los artículos 6º y 7º.

—Se lee el artículo 8º.

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

Deseo que quede sentado, a efectos de su interpretación en el día de mañana, de que los consejos o autoridades universitarios deben ser muy prudentes en la creación de departamentos a que se refieren los artículos 7º y 8º, para evitar una frondosa e innecesaria burocracia.

—Se aprueba el artículo 8º.

—Se lee el artículo 9º.

Sr. Ramella. — Una pequeña aclaración desearía hacer en el sentido de saber si la conjunción «y» va en el texto.

Sr. Presidente (Bavio). — Sí, señor senador.

Sr. Soler. — Es un error de copia.

Sr. Antille. — He leído una observación que se hace por el ex rector de la Universidad del Litoral, profesor Bielsa, respecto a este artículo. Y encuentra un poco de ambigüedad en esta expresión, aduciendo que el gobierno de la universidad tiene que estar a cargo del rector y del consejo, de acuerdo con las funciones que competen a cada uno de estos dos organismos. Pero agregándose las palabras «y del Consejo», parecería que se trata de un organismo unido y formado por otros dos. Y en eso está la ambigüedad.

Sr. Soler. — Le voy a explicar el concepto que se ha tenido en este artículo. Se ha pensado darle una estructuración más o menos semejante a la que puede tener un gobierno democrático, es decir, un poder ejecutivo representado por el rector y un poder legislativo representado por el consejo. Los dos, constituyen el gobierno universitario.

Sr. Antille. — Se debe entender, entonces, que dentro de las facultades que la ley asigna a cada uno de ellos.

Sr. Soler. — En los artículos siguientes se establecen las facultades de cada uno de estos dos organismos.

—Se aprueba el artículo 9º.

—Se lee el artículo 10.

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

Creo, señor presidente, que con el objeto de dar una mayor estabilidad y oportunidad al rector para que pueda realizar la verdadera obra universitaria, en lugar de tres años, podemos fijar cinco. No sé si en la comisión se ha considerado ese aspecto.

Sr. Soler. — Sí, se ha considerado, señor senador, pero se creyó que podría dejarse tres años en primer lugar para no modificar tanto el proyecto de la Cámara de Diputados, ya que el espíritu nuestro era modificar lo más substancial, y, en segundo término, porque se consideró que no había ningún impedimento para que el rector fuera reelegido por el Poder Ejecutivo terminado el período de tres años, si demuestra en el cargo capacidad y condiciones.

Sr. Saadi. — Muy bien. Me doy por satisfecho con las explicaciones dadas.

—Se aprueba el artículo 10.

—Se lee el artículo 11.

Sr. Amelotti. — Pido la palabra.

Hace un momento el señor miembro informante decía, con mucha justicia y razón, que nuestras universidades debían ser auténticamente argentinas. Considero, señor presidente, que el solo hecho de la condición impuesta de ser ciudadano argentino no alcanza a cubrir esa aspiración común que todos tenemos en este caso. Agregaría, entonces, a esto la palabra «nativo», es decir, que para ser rector se requiere ser ciudadano argentino nativo, dándole el verdadero sentido de argentinidad.

Sr. Saadi. — Creo que para poder aceptar la indicación del señor senador por Córdoba, tendríamos que modificar la Constitución. Y como eso no es posible, me parece que las condiciones establecidas en el artículo están bien.

Sr. Amelotti. — Es exacto que nuestra Constitución establece que los ciudadanos naturalizados gozan de los mismos derechos y privilegios que los ciudadanos argentinos nativos. Pero se trata aquí del caso particular de nuestras universidades, a las cuales el rector puede infundirles una cierta modalidad; y en caso de ser extranjero podría modificar y en cierto modo destruir y subvertir el anhelo que todos ponemos al sancionar la ley.

Sr. Soler. — Pido la palabra.

Quiero aclararle al señor senador por Córdoba que el que ha de designar al rector es el Poder Ejecutivo, y creo muy difícil que éste vaya a designar a un extranjero nacionalizado que no vibre a tono con el momento en que está gobernando ese Poder Ejecutivo. Eso es funda-

mental. Y después, señor senador, hay otra cosa que también es esencial, y es que la Constitución establece los cargos que no puede ocupar un ciudadano argentino naturalizado, que son los de presidente y vicepresidente de la República, pero no impide que un ciudadano naturalizado llegue al alto cargo de senador de la Nación. Entonces yo pregunto: ¿si puede llegar a senador de la Nación, por qué no puede llegar a rector de la universidad, máxime cuando para ser rector se necesitan condiciones intelectuales que, si las reúne un extranjero naturalizado, en buena hora ocupe ese cargo para que nos ayude a levantar el nivel científico de nuestro pueblo?

Sr. Amelotti. — Muy bien, señor presidente. Se trataba de una simple sugerencia que hacía.

Sr. Presidente (Bavio). — ¿No insiste en su modificación el señor senador?

Sr. Amelotti. — No, señor presidente, la retiro.

Sr. Presidente (Bavio). — Queda aprobado entonces el artículo 11.

—Sin observación se aprueban los artículos 12 y 13.

—Se lee el artículo 14.

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

Solicito una aclaración al señor miembro informante. Cuando dice jurídica, dentro de las excepciones, ¿no se refiere al caso de los jueces?

Sr. Soler. — La palabra «jurídica» está casi demás en este artículo. No la hemos querido substituir porque representaba una aclaración más que otra cosa.

Sr. Saadi. — Aclarado, no hay inconveniente, señor senador.

Sr. Soler. — Cuando habla de comisión científica, la palabra «jurídica» entra dentro del régimen científico y no hacemos mayor hincapié en eso.

Sr. Saadi. — No refiriéndose a jueces, para los cuales sería incompatible también, no hay inconveniente.

—Se aprueba el artículo 14.

—Sin observación, se aprueban los artículos 15, 16, 17 y 18 hasta el inciso 12, inclusive. Al leerse el inciso 13, dice el

Sr. Amelotti. — Con referencia a este inciso, yo sugeriría una modificación.

Entiendo que legalmente no corresponde que esto sea sometido al referéndum del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, sino al del Poder Ejecutivo, que es el que tiene facultad y atribución para fijar estos aranceles. Yo hago moción en el sentido de que se modifique la

expresión «Ministerio de Instrucción Pública», poniendo en su lugar «Poder Ejecutivo».

Sr. Soler. — Me parece que es una aclaración que en realidad, está demás, porque el Poder Ejecutivo no solamente lo constituye el presidente y vicepresidente de la Nación, sino también sus secretarios.

Sr. Amelotti. — Pero los secretarios integran el Poder Ejecutivo.

Sr. Soler. — Los secretarios nada pueden hacer sin la anuencia del presidente, porque de acuerdo al régimen constitucional, los ministros son designados por el presidente.

Sr. Amelotti. — Justamente, por eso, el Poder Ejecutivo es el que debe legalizar estas situaciones, porque es el que tiene la facultad expresa, jurídica y legal.

Sr. Soler. — Se ha puesto el ministerio, porque hay que jerarquizar las instituciones y el ministro es en realidad el jefe supremo de la instrucción pública del país y si pasamos por encima de él, yendo directamente al Poder Ejecutivo, podemos menoscabarlo.

Sr. Amelotti. — No está en mi ánimo menoscabar ni disminuir la jerarquía del señor ministro, sino sencillamente ajustar la ley a lo que por derecho corresponde, estableciendo que el referéndum debe ir al Poder Ejecutivo. Es evidente que el ministro de Instrucción Pública es un secretario del Poder Ejecutivo y que será por su intermedio que actuará el Poder Ejecutivo, pero debemos ajustar los términos a lo que corresponde. Hago esta sugerencia porque la considero justa.

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

Invito al señor miembro informante a que acepte la modificación propuesta por el señor senador por Córdoba, porque es atinada y no trae ningún inconveniente en el trámite fijado por la ley.

Sr. Soler. — La aceptaría siempre que dijera «al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Instrucción Pública», porque éste es el encargado de cumplir la ley y no podemos quitarle jerarquía.

Sr. Amelotti. — No le quitamos jerarquía.

Sr. Saadi. — No es necesario establecer que el trámite se hará por intermedio del ministerio, porque se entiende que es así.

Sr. Soler. — Bien, señor presidente; no tengo inconveniente en aceptar la modificación.

Sr. Presidente (Bavio). — Habiendo aceptado la comisión, queda aprobado el inciso 13 con la modificación propuesta por el señor senador por Córdoba.

—Se lee el inciso 14.

Sr. Soler. — Pido la palabra.

Nuevamente se ha deslizado un error porque las palabras «ver artículo 105», han sido suprimidas en el despacho definitivo.

Sr. Presidente (Bavio). — Sí, señor senador, están suprimidas en el despacho. Queda aprobado el inciso 14.

—Se lee el inciso 15.

Sr. Amelotti. — Pido la palabra.

Me parece que este inciso no corresponde. No veo el motivo para que deba someterse al Poder Ejecutivo la facultad de «vender, con autorización del Poder Ejecutivo los bienes inmuebles, títulos y valores pertenecientes a la universidad», cuando el artículo 3º dice: «Las universidades poseen plena capacidad jurídica para adquirir, vender y administrar toda clase de bienes, así como para demandar y comparecer en juicio. Su representación compete al rector, quien podrá delegarla y otorgar, en su caso, los poderes necesarios.» En el inciso 15, se establece que, para proceder necesita la autorización del Poder Ejecutivo, con lo que se le niega toda la independencia y autonomía que tiene por la personería jurídica que se le otorga por el artículo 3º.

Creo que este inciso debe eliminarse ya que destruye la facultad expresa acordada por el artículo 3º. Si el señor miembro informante no hace objeción...

Sr. Soler. — Este inciso viene a ratificar lo que acaba de decir el señor senador en cuanto al otro artículo, pero condicionando las facultades, es decir, que de acuerdo con aquel artículo puede vender, pero este artículo lo condiciona: siempre y cuando el Poder Ejecutivo lo permita.

Sr. Amelotti. — No, señor senador, porque el artículo 3º es terminante.

Sr. Soler. — Lo que hace este inciso es condicionar; de lo contrario, podría correrse el riesgo de que la universidad enajenara todos sus bienes, sin que el Poder Ejecutivo intervenga en lo más mínimo y es de presumir que el Poder Ejecutivo, como administrador de todos los bienes de la Nación, tendrá interés en que ello no ocurra.

Sr. Amelotti. — Entonces tendremos que modificar el artículo 3º y suprimir la independencia que le acordamos a la universidad.

Sr. Ramella. — Pido la palabra.

En realidad, como dice el señor miembro informante, esta disposición es una limitación a la facultad acordada por el artículo 3º. Y hay más todavía: estrictamente, el Poder Ejecutivo, para disponer de los bienes inmuebles de la universidad, tendría que requerir la autorización al Congreso, de acuerdo con la cláusula constitucional pertinente, que establece que los bienes del Estado nacional sólo pueden ser enajenados con la autorización del Congreso. Y así hemos visto cómo frecuentemente el Poder Ejecutivo requiere del Congreso esa autorización.

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

No obstante lo expresado por el señor miembro informante y por el señor senador por San Juan, pienso que son atinadas las observaciones formuladas por el señor senador por Córdoba, y que son justas. Empezamos por establecer una contradicción en la ley; no pueden subsistir las dos disposiciones en la forma en que están redactadas, pese a la interpretación que le dan los señores senadores. Y creo que no perderíamos nada suprimiendo el inciso a que hace referencia acertadamente el señor senador por Córdoba. Hablamos de autonomía económica de la universidad; no lo olvidemos, señores senadores.

Sr. Amelotti. — Y en eso se ha fundado todo el informe de la comisión.

Sr. Soler. — Si se suprime ese inciso, tampoco va a poder vender sin acuerdo del Poder Ejecutivo, quien a su vez tendrá que requerir la anuencia del Congreso.

Sr. Amelotti. — Entonces, no podemos darle la facultad del artículo 3º y tendríamos que modificarlo.

Sr. Saadi. — Hay un error, señor senador por Mendoza.

Sr. Soler. — El inciso ha querido establecer la garantía de que los bienes de la universidad no van a poder ser enajenados sin el conocimiento del Poder Ejecutivo.

Sr. Saadi. — Un consejo universitario tiene o debe ofrecer todas las garantías. Si el consejo universitario no ofrece suficiente garantía de moralidad y de honestidad, no es digno de ser consejo universitario.

Sr. Soler. — Con ese principio no necesitaríamos ni Constitución ni leyes, como sostenía un gobernador de mi provincia, y sólo bastaría la honestidad y la moral. (Risas.) Que con los gobiernos bien intencionados —decía— la Constitución está demás. ¿Pero qué hacemos con los gobiernos bien intencionados? Lo que hace falta es la ley.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

No encuentro contradicción entre ambas disposiciones. El artículo 3º se refiere a la capacidad jurídica para adquirir y vender, mientras que el inciso que se está discutiendo se refiere a la forma cómo ha de llegar a realizarse el cumplimiento de esta capacidad que se otorga, y esa forma es previa intervención del Poder Ejecutivo, o con su asentimiento. Una vez que éste consiente la venta, es el rector, de acuerdo con la capacidad que se le acuerda por el artículo 3º, quien efectúa la operación. No hay contradicción entre ambas disposiciones y las considero, en cambio, convenientes.

Sr. Amelotti. — El artículo 3º es terminante: «Las universidades poseen plena capacidad jurídica para adquirir y vender...»

Sr. Antille. — En realidad, señor senador, hay un procedimiento para llegar a la realiza-

ción de esa capacidad. También se dice que puede otorgar poderes, pero si no interviene un escribano público...

Sr. Saadi. — Esa es otra cosa.

Sr. Antille. — Es lo mismo. Ese procedimiento necesita la intervención de un funcionario que ha de ratificar su voluntad de dar poderes. Aquí debe dar la intervención el Poder Ejecutivo, el que por otra parte, es el administrador de todos los bienes del país.

Sr. Soler. — ¿Si me permiten los señores senadores? Como presidente de la comisión manifiesto que ella no acepta la indicación.

Sr. Presidente (Bavio). — ¿El señor senador por Córdoba insiste?

Sr. Amelotti. — Yo, señor presidente, había formulado una sugerencia por creerla ajustada y a fin de evitar contradicciones. Pero no insisto y la retiro.

Sr. Presidente (Bavio). — Queda entonces aprobado el inciso 15.

—Sin observación se leen y aprueban los incisos 16, 17, 18 y 19.

—Se lee el inciso 20.

Sr. Amelotti. — Pido la palabra.

Observo, señor presidente, que en el artículo 12 inciso 10, entre las facultades del rector dice: «nombrar y remover el personal de la universidad, cuya designación y remoción no corresponda al Consejo Universitario o a las facultades, de acuerdo con el artículo 123 de la ley 12.961, y su reglamentación»; pero no veo aquí, cuáles son las facultades del Consejo Universitario para designar aquéllas personas que el rector no tiene facultad de hacerlo.

Me parece que sería conveniente establecer la facultades que corresponderían también en este caso, a fin de que estuviesen fijadas, en un inciso que las determine, cuáles son las facultades y cuál es el personal que debe designar el consejo. Porque creo que entre una de las facultades que debería tener el consejo está, precisamente, la designación de su secretario y de su prosecretario, como también la del contador y del tesorero, que podría ser hecha por la facultad.

Como aquí no se establece nada al respecto, rogaría al señor miembro informante tuviera a bien aclararme cuáles son las facultades que tiene el consejo en el sentido de designar personal.

Sr. Soler. — Pido la palabra.

Contestando la observación del señor senador por Córdoba, referente a si los consejos tienen facultades para designar al personal técnico de la casa, es decir, el personal de profesores, diré que esa sí es una facultad que tiene el consejo. La otra, la designación del personal

administrativo, es facultad de los decanos y de los rectores. Pero además de esta prescripción, recordemos la reglamentación de la ley, donde se va a especificar claramente cuál es el personal que podrá nombrar el rector, de acuerdo con la ley de contabilidad. Esta facultad, repito, que se le da al rector, está de acuerdo con la ley de contabilidad, la ley 12.961. Entonces, en la reglamentación podrán verse esas cosas, señor senador. Si nosotros sancionamos una ley incluyendo la reglamentación, va a ser una mala ley. La reglamentación está a cargo del Poder Ejecutivo, y en esa oportunidad se aclararán todos los puntos de vista del señor senador, que son muy justos, pero no tienen por qué estar en la ley.

Sr. Amelotti. — Vuelvo a repetir que no tengo más propósito que el de dar a la ley la mayor claridad posible, y deseo señalar aquí que a través de lo que he leído en ella, observo que en un 70 % casi, es reglamentaria, lo que equivale a decir que todos aquellos puntos que pudiéramos ir considerando en la misma, para su mayor claridad y mejor aplicación, no estarían demás, por aquello de que lo que abunda no daña. No obstante ello, voy a retirar mi observación.

—Se aprueba el inciso 20 y con ello el artículo 18.

—Se leen y aprueban los artículos 19, 20, 21 y 22.

—Se lee el artículo 23.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

Desearía que el señor miembro informante me dijera por qué no se suprimen las palabras «en el mismo carácter». No pueden ser reelegidos en otro carácter. Está demás esta aclaración de la ley.

Sr. Soler. — Quiere decir que los consejeros pueden ser elegidos en otro carácter, por ejemplo, como decanos.

Sr. Antille. — Pero entonces ya no serían reelegidos.

Sr. Soler. — En realidad, hay una pequeña redundancia.

Sr. Antille. — Solicito entonces que se supriman esas palabras.

Sr. Presidente (Bavio). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Soler. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Bavio). — Queda, entonces, aprobado el artículo con la supresión de las palabras «con el mismo carácter».

—Se aprueba el artículo 24.

—Se lee el artículo 25.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

Para hacer más claro el pensamiento de este artículo, correspondería substituir las palabras «que pierdan su condición de profesor», por las siguientes: «dejen de ser profesores», porque no es una condición la de ser profesor, sino una función, un cargo y no podría nunca considerarse como condición por una ley que tiene carácter universitario.

Sr. Soler. — No hay ningún inconveniente en aceptar la substitución propuesta por el señor senador por Santa Fe.

Sr. Presidente (Bavio). — Queda aprobado el artículo en la forma propuesta y aceptada por la comisión.

—Se leen y aprueban sin observación los artículos 26 a 31 inclusive.

—Se lee el artículo 32.

Sr. Secretario (Reales). — El despacho de la comisión suprime los incisos 12 y 13; el 14 pasa a ser 12.

—Se aprueba el artículo 32, como así también los artículos 33 al 44 inclusive.

—Se lee el artículo 45.

Sr. Vallejo. — Pido la palabra.

En el artículo 45 se decía: «Para ser designado profesor titular se requiere ser argentino y poseer el título máximo o diploma de la respectiva carrera...»

Sr. Presidente (Bavio). — Advierto al señor senador, que la comisión no proyectó la palabra «máximo».

Sr. Vallejo. — En el estudio que habíamos hecho, señor presidente, estaba comprendida dicha palabra.

Sr. Soler. — Pido la palabra.

Efectivamente, el señor senador por La Rioja tiene razón en llamar la atención respecto a este artículo. Al principio se había pensado en incluir la palabra «máximo», pero esta mañana desistió de ello la comisión. De manera, entonces, que el despacho que consideramos no la incluyó.

Sr. Antille. — Antes de votarse este artículo, voy a pedir algunos informes sobre si se mantiene la excepción del artículo 52, en cuanto al título para ser decano, ya que se exige de título universitario cuando el aspirante no lo tenga, siempre que haya unanimidad de todos los miembros del consejo. Entre las informaciones que he recogido, hablando de este asunto con profesores universitarios de la Universidad del Litoral, se aduce que no es posible suponer en la ley, que no existan en el país profesores titulares y se deba acudir a profesores que no tengan título, o a miembros del consejo que no

lo tengan, porque eso es renegar un poco de la universidad y de la tradición universitaria.

Yo creo que debe exigirse en todos los casos sin la excepción del artículo 52, que el título debe ser universitario y aun haría hincapié que fuera el título superior que otorga la facultad.

Sr. Soler. — Hay un concepto hecho en la docencia de nuestro país, de que muchas veces se ha permitido dictar cátedras en una asignatura determinada a personas que sin tener el título universitario han descollado notablemente en la materia. Se trata del caso de los literatos, que sin ser profesores de castellano, se los ha admitido en la cátedra como profesores, y la ley establece que, durante tantos años de ejercicio, serán confirmados en el puesto y reconocidos como título habilitante. Es igual el caso de los profesores de historia.

Por otra parte, el hecho de no haber cursado estudios universitarios no significa que esas personas no puedan haber adquirido sus conocimientos y podemos dar la oportunidad de enseñar a una generación, a aquellos hombres que se han especializado sin título.

Sr. Antille. — Voy a insistir en este asunto porque veo que el señor miembro informante olvida que se trata de profesor titular, y cuando más adelante se va a ver que una persona que se destaque, sin título, puede ser admitida, ya sea teniendo la «venia docendi», siendo profesor adjunto, o profesor libre. En esa forma podrá servir al país de la manera que el señor miembro informante lo indica, pero no puede ni debe ser profesor titular.

Sr. Gómez del Junco. — Como el Consejo Directivo está formado por titulares y suplentes, la comisión ha creído oportuno dejar que pueda ser un suplente.

Sr. Antille. — Hago observar que es una negación de la función universitaria.

Sr. Gómez del Junco. — Si se sientan en el consejo un titular y un suplente, al consejo, que es el que hace la terna, ¿por qué se le va a prohibir que lo incluya?

Sr. Antille. — No deseo insistir ni hacer un debate, pero observo que debe reconocerse el valor del título universitario.

Sr. Soler. — La comisión entiende que no tiene ningún inconveniente en retirar esa parte de la excepción, ya que con la «venia docendi», en la misma ley hemos llenado este claro que no existía en la ley universitaria anterior.

Sr. Antille. — Como se retira por la comisión esa parte, pido que se supriman las palabras «salvo la excepción del artículo 52».

Sr. Presidente (Bavio). — Se va a votar el artículo 45 con la supresión de las últimas palabras: «salvo la excepción del artículo 52».

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación se lee y aprueba el artículo 46.

—Se lee el artículo 47.

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

Con el objeto de dar una ajustada interpretación a este artículo, deseo que el señor miembro informante me aclare un concepto: se refiere a que no podrá defender intereses ajenos frente al Estado, pero sí los propios. Yo le pediría, si no tiene inconveniente al señor miembro informante, que se apruebe el artículo con ese alcance.

Sr. Soler. — No hay inconveniente; nadie puede prohibirle su propia defensa. No hay ley que se lo prohíba porque lo ampara la Constitución.

Sr. Saadi. — Pero conviene dejarlo aclarado para que no pueda haber lugar a dudas.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

Soy de opinión de que se deje aclarado en la ley, porque se pueden defender intereses personales y aun ajenos cuando se trata, por ejemplo, de los derechos de menores que el padre tiene para su tutoría y representación, aun ejerciendo la curatela de los que están bajo ese mandato; y yo diría que hasta puede defender intereses de la esposa que pueden ser comunes con los del esposo profesor. De manera que habría que aclararlo perfectamente.

Sr. Saadi. — El espíritu del artículo se refiere a que no sea apoderado de empresas y que por esa circunstancia en la cátedra se pueda torcer la enseñanza con fines no morales.

Sr. Soler. — Ese ha sido el espíritu del artículo, señor senador.

Sr. Antille. — Si el señor senador acepta, yo indicaría que se estableciera la excepción, en esta forma: «Salvo los casos de defensa de intereses personales del profesor, su cónyuge, ascendientes o descendientes.» En esta forma, quedarían comprendidos todos los casos en que pueda encontrarse un profesor.

Sr. Soler. — No hay ningún inconveniente, porque de hecho tiene el derecho de defensa.

Sr. Presidente (Bavio). — Se va a votar el artículo con la modificación propuesta por el señor senador por Santa Fe.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

Propongo un nuevo artículo a continuación del que acaba de aprobarse, que sería el siguiente: «Los profesores tendrán las mismas incompatibilidades que el rector y decano.»

Sr. Presidente (Bavio). — ¿Se refiere a los profesores titulares, señor senador?

Sr. Saadi. — Sí, señor presidente.

Sr. Soler. — Creo que en realidad ese artículo está contemplado en el alcance que el Honora-

ble Senado le ha dado al desempeño de las funciones de legislador y catedrático. La prueba está en que hay señores legisladores que mientras desempeñan ese cargo han pedido licencia para separarse de sus cátedras, no porque haya incompatibilidad moral en el desempeño de ellas, sino porque hay una incompatibilidad material por el factor tiempo. Nosotros creemos que un catedrático de una facultad debe dedicar la mayor parte del día a su cátedra, y que un legislador también necesita dedicar la mayor parte del día para desempeñar su cometido como corresponde. De manera, entonces, que en principio no hay ningún inconveniente, pero como vamos a lesionar otra clase de intereses, no ya los del legislador sino los del catedrático, podríamos reflexionar un poco antes de incluir el artículo que propone el señor senador por Catamarca.

Sr. Saadi. — En concreto, ¿cuál es el pensamiento de la comisión? ¿Aceptaría el artículo?

Sr. Soler. — Creo que no convendría introducir modificaciones, porque sé que vamos a encontrar seria resistencia en la Cámara de Diputados, porque ése es un problema de cierta importancia y no hemos tenido en cuenta ese factor. No se habló del mismo en el bloque, en cuanto a las modificaciones que pensábamos introducir en esta ley.

Sr. Saadi. — Creo que el pensamiento de este cuerpo debe ser uno solo y un pensamiento orgánico, que lo viene observando en todas las sanciones dadas. Empezamos con la primera ley del plan quinquenal, la del servicio exterior de la Nación, que en su artículo 15 lo establecimos en forma mucho más amplia. Hemos establecido para el cargo de rector lo mismo que para el cargo de decano de la universidad. Llevamos a los profesores universitarios a un sueldo elevado, a un sueldo más que suficiente para vivir con todo el decoro y la dignidad necesarios él y su familia. No podemos crear la industria de la universidad o del docente, Creo que con *full time* o sin él, no se pueden dejar de establecer las incompatibilidades. Una razón superior de ética y de la política que orienta a nuestro presidente nos obliga a dar la sanción respectiva. El maestro volverá mañana y con sus títulos entrará por la puerta grande de la universidad. No hay ningún peligro. No va dirigido contra nadie sino que va en favor de la universidad para que esos maestros tengan el tiempo suficiente para ir a desempeñar su cátedra. No se pueden desempeñar dos cargos de esa magnitud al mismo tiempo. Establecemos el *full time* y el medio *full time*; no puede desempeñarse más de un solo cargo.

Insisto, señor presidente, ante el señor miembro informante a fin de que acepte la inclusión de este nuevo artículo.

Sr. Amelotti. — Pido la palabra.

Corroborando las consideraciones que se han hecho, desearía señalar este caso.

Un profesor gana \$ 1.800 mensuales por esta ley. Si ese profesor desempeña una función de médico de los tribunales, por ejemplo, con \$ 2.000, equivaldría a decir que cobraría \$ 3.800 mensuales, por lo que estaría en situación ventajosa con respecto a aquel profesor que se ha dedicado exclusivamente a su cátedra y tiene un sueldo de \$ 3.500, en compensación a toda la dedicación que preste a su cargo y desde el cual se pasará la vida repartiendo sabiduría.

Ese es mi concepto en esta oportunidad y me voy a solidarizar con el criterio de que no debe realizar más función que la de profesor ni tener otro emolumento de ninguna otra naturaleza, de origen nacional, provincial, municipal o de cualquier otro orden.

Sr. Vallejo. — El artículo propuesto por el señor senador por Catamarca estaría perfectamente en concordancia con los propósitos y finalidades del artículo 47, cuando dice: «El profesor titular está obligado a dedicar el máximo de su tiempo a las tareas de investigación y docencia.» Entiendo que ha querido la comisión que el profesor se dedique exclusivamente a su función de tal. Por eso, con suprimirle la última parte y establecer la incompatibilidad estará perfectamente bien y en las mismas condiciones que el rector y el decano.

Sr. Ramella. — Pido la palabra.

Entiendo que en este asunto hay que distinguir dos cosas: la situación del profesor y la relativa al cobro de sueldos. Yo también considero que no se pueden ejercer dos funciones al mismo tiempo. Pero no hay que perder de vista que la función profesional implica una verdadera carrera, se llega a ella después de largos estudios y por una profunda vocación, mientras que la función legislativa bien sabemos que es completamente accidental. De manera que, no veo por qué se va a privar a un legislador nacional que sea profesor universitario.

Ahora, no habría inconveniente en establecer —porque surge, me parece, naturalmente, de la ética de cada persona— que no se pueden cobrar dos sueldos a la vez, cuando se es profesor y se tiene una función legislativa.

Creo que no tenemos que perder de vista, en materia de incompatibilidades legislativas, que todas aquellas que no sean estrictamente indecorosas, no hay por qué mantenerlas, porque la función legislativa, como dije, es completamente accidental y no es posible privar a una persona de su medio de vida normal por el solo hecho de haber aceptado una función legislativa.

En esa forma se establece una distinción más pronunciada, de acuerdo con lo que habíamos considerado, entre la función universitaria y la

función política, que es la vida misma del pueblo.

Creo que nosotros no podemos extremar las cosas hasta ese punto. No soy partidario de que se introduzca esta modificación.

Sr. Gómez del Junco. — Pido la palabra.

Si hemos resuelto que el rector y el decano tengan incompatibilidad para ejercer otro cargo, lo mismo debe hacerse con el profesor universitario.

La función legislativa, si bien es accidental, obliga al legislador a dedicarle todo su tiempo, y el profesor, que es profesor y legislador a la vez, podrá pedir permiso por el tiempo que dure su función accidental de legislador. La universidad le concede el permiso lo mismo que se lo da a los profesores que se ausentan del país en calidad de embajadores. Se trata de la misma incompatibilidad porque el embajador no sigue siendo embajador y profesor en actividad a la vez y no cobra los dos sueldos, sino que solicita permiso y mantiene su cátedra, a la cual se reintegra cuando deja su función accidental de embajador.

Ese ha sido el criterio con que la mayoría de la comisión ha considerado este asunto.

Por esas razones, apoyo la moción del señor senador por Catamarca para que se establezca la incompatibilidad de las funciones de legislador con cualquier otra función, sea juez o profesor universitario.

Sr. Tascheret. — Pido la palabra.

Participo del concepto de la incompatibilidad, pero, tratándose de la carrera universitaria, estoy de acuerdo con la opinión manifestada por el señor senador por San Juan, doctor Ramella.

Es indudable que el profesor universitario es un hombre que ha necesitado, para llegar a tan elevada función, la dedicación por entero de toda su vida y de toda su actividad. No es posible que por una representación popular de carácter electivo o bien por el desempeño de otras funciones pueda perder el carácter de profesor universitario. De aceptarse este temperamento, indudablemente el país —en sus cargos directivos y en sus funciones representativas y en todos los órdenes, sobre todo en el científico y cultural—, perdería una serie de hombres que podrían representarlo.

Hace pocos momentos el señor senador por Córdoba lo ha señalado muy bien: muchas veces el país ha necesitado mandar como embajador a un profesor, o como representante del país ante un congreso importante; otras veces, para desempeñar funciones dentro del país, y en esos casos es evidente que no puede perder su condición de profesor. Creo que ello es compatible, señor presidente; bastaría con dictar una disposición expresa en el sentido de que mientras dure el desempeño de otro cargo, debe pedir licencia, que es lo que ocurre actualmente. Nos-

otros tenemos el caso en el mismo Senado: el del senador por Mendoza doctor Mathus Hoyos, que para desempeñar sus funciones de senador, ha pedido licencia en sus tareas docentes. Ese, que es un ejemplo digno de imitarse, desgraciadamente no es imitado por todos.

Hace un momento citaba el caso de un alto funcionario del gobierno que desempeña las tareas de profesor y dos o tres cargos más, y esto es lo que debemos prevenir, haciendo que este señor sea profesor o desempeñe la otra función, pero de ninguna manera hacerle perder su carrera universitaria.

Estando en la provincia de Buenos Aires en la Dirección General de Higiene, recuerdo el caso de un jefe mío, profesor de la Universidad de La Plata, a quien se le presentó una situación sumamente difícil, y que posteriormente fué criticado porque renunció a las funciones que desempeñaba en la Dirección de Higiene, aunque yo creo que estuvo perfectamente bien, porque él, ante todo, amaba su carrera universitaria, a la cual había dedicado todos sus afanes.

Por esas razones, señor presidente, insisto en que estas incompatibilidades sean consideradas de acuerdo con el criterio que dejo enunciado.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

Creo que sería conveniente que una ley de incompatibilidades fijara con carácter general la imposibilidad para un funcionario de ocupar otro cargo o realizar otra actividad de cualquier carácter que fuese. Pero encuentro inconveniente que improvisemos en esta materia, en una ley particular, sobre incompatibilidades de los profesores, y sobre incompatibilidades de los diputados y senadores de la Nación. Esto debe ser materia de una ley aparte, con estudios profundos y analizando el bien o el mal que de ello puede resultar.

En este aspecto de las incompatibilidades he llegado a sostener, por el conocimiento que tienen los jueces al dictar los fallos y estudiar sus fundamentos, que convendría que los jueces no se separaran de la cátedra, porque llevan a ella lo que aprenden en el ejercicio de la magistratura y traen a ésta lo que aprenden enseñando la materia. Pero esto, que en términos generales es aceptable y no puede discutirse, es imposible de aceptarse en el hecho cuando por falta de tiempo se quiere y no se puede realizar las dos funciones a la vez. No tengo en cuenta el mayor sueldo que se obtiene al desempeñar las dos funciones; sólo tengo en cuenta que el profesor debe dar todo el tiempo que pueda al ejercicio de la docencia. Para eso se han incorporado a la ley artículos especiales que hablan de *full time*, del tiempo indispensable en función de docente. Con esto me parece que basta. El profesor que no cumpla con esa condición, se hará pasible de la aplicación de las disposiciones de la misma ley que autorizan

la separación del docente. No sé si al considerar los artículos siguientes podremos ver este asunto con toda amplitud. Hay artículos que establecen que un docente termina su función «por condena criminal, por abandono de la función del cargo de profesor y por violación del artículo 47», quiere decir, que dentro de las facultades del organismo directivo está la de corregir cualquier mal que exista, que no será otro que faltar al deber como profesor, de dirigir la enseñanza. Es decir, que no se puede ser profesor y diputado a la vez, que creo que es la indicación del señor senador por Catamarca...

Sr. Saadi. — No. Si me permite el señor presidente, le haré una aclaración al señor senador. En ningún momento he dicho diputado. Yo pido las mismas incompatibilidades que se exigen a los rectores. No comprende a los diputados.

Sr. Antille. — ¿Es con respecto al ejercicio del mandato popular?

Sr. Saadi. — Yo hago la misma incompatibilidad que se establece para ser rector, señor senador.

Sr. Antille. — ¿Y en ese caso?

Sr. Saadi. — También está incluida la de los diputados.

Sr. Antille. — ¿Cuáles son las otras? Porque si no las fijamos...

Sr. Saadi. — Están fijadas en el proyecto, señor senador, y si revisa lo que ya hemos sancionado, las encontrará.

Sr. Antille. — ¿La incompatibilidad se refiere al ejercicio de un mandato popular?

Sr. Saadi. — No, señor senador.

Sr. Tascheret. — Está consignada en el artículo 14.

Sr. Saadi. — «El cargo de rector es incompatible con cualquier otra actividad pública, excepto la docencia en la misma universidad o la de conferenciante, investigador, autor o miembro de academia, institución, sociedad o comisión científica, jurídica, social, literaria o cultural.»

Sr. Antille. — Yo preguntaría cuál es la actividad pública que crea la incompatibilidad con el cargo de profesor. Porque por función pública yo entiendo que es el ejercicio de un mandato popular.

Sr. Saadi. — En parte puede ser, señor senador.

Sr. Antille. — ¿Y la otra?

Sr. Saadi. — Cualquier desempeño que tenga en la función pública.

Sr. Antille. — ¿Como miembro del poder judicial?

Sr. Saadi. — Sí, señor senador, lo hemos dejado aclarado.

Sr. Antille. — Surge la incompatibilidad por la falta de tiempo para realizar su función docente, y eso no necesita que se diga expresamente, porque está establecido al determinar

que el profesor debe dedicar todo su tiempo o *full time*; si no lo hace, no cumple con su deber.

Sr. Saadi. — Queremos, señor presidente, que el profesor sea profesor, sea maestro y enseñe, y el que desempeñe cualquier otra función pública, cumpla también con la misma.

No hay en ello ningún interés ni va contra nadie. Es un principio de ética y de interés superior y que cada uno debe ser eficaz y cumplir con sus obligaciones en la función que desempeña. No hay interés, repito, que una persona determinada pueda perder su cátedra; no queremos privar a la cátedra de ningún maestro. Queremos que cuando vaya a la cátedra, sea maestro. Puede pedir permiso y todo lo que se quiera, pero debe ser incompatible con el desempeño de la cátedra al mismo tiempo que con otra función pública.

Sr. Tascheret. — Yo no estoy muy de acuerdo con la parte final de las palabras que acaba de pronunciar el señor senador por Catamarca. Podría redactarse un artículo pero con distinta redacción...

Sr. Saadi. — Muy bien señor senador. Propongalo y si coincide con mi pensamiento no tendré ningún inconveniente en aceptarlo.

Sr. Presidente (Bavio). — Se va a leer el artículo que ha proyectado el señor senador por Catamarca.

—Se lee:

Los profesores tendrán las mismas incompatibilidades que el rector y el decano.

Sr. Tascheret. — No podrá ejercer simultáneamente dos funciones, la cátedra y otra actividad pública. Este pensamiento podría aclarar la comprensión del artículo.

Sr. Soler. — Se refiere a los profesores titulares.

Sr. Presidente. — ¿La comisión acepta el artículo propuesto por el señor senador por Catamarca?

Sr. Soler. — Voy a manifestar que tendré que aceptarlo porque veo que hay mayoría en la Cámara sobre esta idea (*risas*), pero con la aclaración de que se trata de los profesores titulares y que no pierden su condición de profesores. Pedirán licencia en su cátedra, pero, insisto, no han de perder su calidad de titulares.

Sr. Saadi. — Perfectamente de acuerdo.

Sr. Antille. — Esa redacción no satisface, porque si hay incompatibilidad, ésta debe existir en todo momento. Se deja de ser profesor de hecho por la incompatibilidad. Creo que la redacción propuesta por el señor senador por San Juan es la que corresponde porque interpreta el pensamiento general: no se puede ejercitar simultáneamente las funciones de profesor y alguna otra actividad pública. Incluso esta frase final es un tanto ambigua, y creo que debería

referirse a las funciones emanadas del mandato popular y al ejercicio de la magistratura.

Sr. Saadi. — Con la aclaración formulada, es más propia y conveniente la redacción del artículo tal cual lo propuse yo, porque se establecen los casos de excepción en que es permitido el desempeño del cargo de profesor. En el artículo 14 que hemos sancionado, sobre incompatibilidades para el rector...

Sr. Ramella. — No es exactamente así, señor senador, porque el artículo 14 establece precisamente que el rector puede ser profesor. ¿Pero quiere decir que el legislador puede ser profesor? No es posible aplicar los mismos términos a dos situaciones distintas.

Sr. Saadi. — No, señor senador. Hemos dado perfectamente el alcance. El legislador no puede ser rector, pero profesor puede ser, indiscutiblemente.

Sr. Antille. — No es posible establecer en esta ley una incompatibilidad para los legisladores. Habría que hacer una ley especial.

Sr. Saadi. — No se refiere al legislador, no quiero que confunda. Queremos legislar para todos, y este artículo tiene un carácter más amplio que el que el señor senador le asigna.

Sr. Vallejo. — El artículo 60 de esta ley establece cuántas cátedras puede tener un profesor.

Sr. Gómez del Junco. — La incompatibilidad se hace necesaria. Ya hay antecedentes que, sin figurar en la ley, sin ser incompatibles los cargos de profesores con el mandato legislativo, nos recuerdan que había legisladores que pedían permiso para faltar a su cátedra, tal como el caso del doctor Gregorio Martínez, profesor de clínica médica de la Universidad de Córdoba, cuando vino como diputado. Pide permiso por el término que dure su mandato y se le concede, pero vuelve nuevamente a su cátedra porque no ha perdido su carácter de profesor.

Sr. Antille. — Entonces no era incompatible.

Sr. Gómez del Junco. — El caso del doctor Benito Soria que vino al Senado de la Nación y pidió permiso mientras durara su mandato y no perdió la cátedra.

Sr. Antille. — ¿Me permite una interrupción? Si hubiera sido incompatible, hubiera perdido la cátedra.

Sr. Gómez del Junco. — No, señor senador.

Sr. Antille. — ¿Cómo no? Si es incompatible no pudo mantenerla.

Sr. Saadi. — Es incompatible con el ejercicio de la cátedra. Pero eso, con estas palabras está aclarado...

Sr. Ramella. — Si todavía se está discutiendo, quiere decir que no está aclarado.

Sr. Tascheret. — Voy a proponer que el artículo diga así: «El profesor titular no podrá desempeñar simultáneamente la función docente y la de cualquier otra actividad pública.»

Sr. Ramella. — Con este artículo queda completamente aclarado lo que se quiere decir.

Sr. Saadi. — No tengo inconveniente. El pensamiento es el mismo.

Sr. Presidente (Bavio). — ¿La comisión acepta?

Sr. Soler. — Sí, señor presidente; por la fuerza de las circunstancias, acepta. (*Risas.*)

Sr. Presidente (Bavio). — Se va a votar el artículo propuesto por el señor senador por San Juan, que es uno nuevo dentro de la ley.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee y aprueba el artículo 49.

Sr. Gómez del Junco. — Pido la palabra para hacer moción de que se lea el número del artículo solamente.

Varios señores senadores. — ¡No! ¡No!

Sr. Ramella. — ¡No! Porque es una ley muy importante.

Sr. Presidente (Bavio). — ¿Insiste en su indicación, señor senador?

Sr. Gómez del Junco. — No, señor presidente, la retiro.

—Se lee el artículo 50.

20

MOCION

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

Hago moción para que la Cámara pase a un cuarto intermedio hasta mañana a las 10 y 30.

—Apoyado.

Sr. Presidente (Bavio). — En consideración la moción formulada por el señor senador por Catamarca.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Bavio). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 10 y 30.

—Eran las 21 y 50.

FRANCISCO GARCÍA BELTRÁN.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.